

*nuestros
derechos*

**Lenguaje y derecho.
Las normas jurídicas como
sistema de enunciados**

ENRIQUE CÁCERES NIETO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



ENRIQUE CÁCERES NIETO

Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid; investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ha publicado los siguientes artículos "Sobre los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual", *Jurídica*, 1995; "Relativismo y racionalidad en la argumentación parlamentaria", *Quórum*, 1995; "Pasos hacia una teoría jurídica comunicativa", *Crítica*, 1995; "Informática jurídica en México", *Perspectivas actuales del derecho*, 1991; "Reflexiones sobre el *status* científico de la informática jurídica", *Les Annales de l'IRE-TIJ. Informatique e Droit*, 1990; "La metodología del *abstract* legislativo", *Diálogo sobre la informática jurídica/Dialogue sur l'informatique juridique*, 1989; "El sistema mexicano UNAM-JURE", *Problemas actuales de la documentación y la informática jurídica*, 1986; "Lógica jurídica e informática jurídica", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, 1984.

LENGUAJE Y DERECHO. LAS NORMAS
JURÍDICAS COMO SISTEMA DE ENUNCIADOS

**CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, LVIII LEGISLATURA**

Dip. Ricardo Francisco García Cervantes
*Presidente de la Conferencia para la Dirección
y Programación de los Trabajos Legislativos
y de la Mesa Directiva*

Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel
*Presidenta de la Junta de Coordinación Política
y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI*

Dip. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Martí Batres Guadarrama
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD

Dip. Bernardo de la Garza Herrera
Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Dr. Diego Valadés
Director

Dr. Sergio López-Ayllón
Secretario Académico

Lic. Raúl Márquez Romero
Jefe del Departamento de Publicaciones

*nuestros
derechos*

LENGUAJE Y DERECHO. LAS NORMAS JURÍDICAS COMO SISTEMA DE ENUNCIADOS

ENRIQUE CÁCERES NIETO



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Colección Nuestros Derechos

Coordinadora: Marcia Muñoz de Alba Medrano

**Diseño de portada y coordinación
de ilustraciones: Eduardo Antonio Chávez Silva**

Cuidado de la edición y formación en computadora: Isidro Saucedo

Ilustraciones: Alejandro López-Araiza Larroa

Primera edición: 2000

Primera reimpresión: noviembre de 2000

DR © 2000. Instituto Politécnico Nacional

DR © 2000. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n

Ciudad Universitaria, México, D.F., C.P. 04510

Impreso y hecho en México

ISBN 968-36-8221-9

CONTENIDO

Presentación	XI
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN	
Amable lector	XV
Diego VALADÉS	
I. Introducción	3
II. El derecho como sistema de normas	8
1. Lenguaje, realidad y derecho	8
2. Nacho el gacho	9
3. Mentes, discurso y programación	11
III. Definición de "norma jurídica"	12
1. Clasificación de enunciados	12
2. Tipos de enunciados y funciones lingüísticas	15
3. Elementos necesarios de la definición de "estructura normativa"	18
4. Elementos periféricos a las normas	23
5. Normas jurídicas como enunciados prescriptivos	25
6. Las normas jurídicas como enunciados performativos	29

7. Normas definitorias	30
8. Normas regulativas y normas constitutivas, hechos brutos e institucionales	31
9. Normas primarias y secundarias	32
IV. "Derecho" en sentido de "derecho objetivo" .	35
1. El derecho: un "mecano" normativo	35
2. Definición de "sistema jurídico"	40
3. Criterio de identidad de los sistemas jurídicos concretos	42
4. El criterio de pertenencia de una norma a un sistema jurídico: árboles genealógicos y cadenas de validez	44
5. La existencia de los sistemas jurídicos	46
6. Las fuentes del derecho	51
7. La estructura jerárquica de las leyes	54
8. La definición de "derecho" en sentido de "derecho objetivo" a partir del significado de "sistema jurídico"	55
9. Derecho estatal, derecho internacional y derecho primitivo	55
10. Relevancia de la definición de "derecho" en el sentido de "derecho objetivo" en la co- lección de cuadernillos Nuestros Derechos	58
V. "Derecho" en sentido de "derecho subjetivo"	59
1. Los derechos de los sujetos	59
2. Conceptos jurídicos fundamentales	60

VI. "Derecho" en el sentido de "ciencia jurídica"	71
1. Radiografías, leyes y jurisprudencia	71
2. Técnicos y abogados	73
3. La actividad "científica" en el derecho	75
Bibliografía	79

PRESENTACIÓN

Es trabajo cotidiano de los diputados federales actualizar las leyes y las normas que permiten la convivencia pacífica de todos los mexicanos, incluyendo a los que viven fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, no basta con hacer nuevas leyes o reformar las que están vigentes, es menester darlas a conocer para que los ciudadanos y sus familias sepan, de manera cierta y clara, cuáles son sus derechos y cuáles sus obligaciones, a quiénes deben acudir cuando se enfrentan a los problemas de la vida diaria.

La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, consciente de la necesidad de coadyuvar en la difusión de los derechos que otorgan las leyes que del Poder Legislativo emanan y con la finalidad de que los hombres y mujeres conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos, firmó un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de investigación, difusión y extensión de la cultura jurídica, que dio como resultado la edición de una serie de textos, con el nombre genérico de Nuestros Derechos, en los que encontramos las respuestas a:

¿Cuáles son los derechos que reconoce el sistema jurídico mexicano?

¿Cuáles son las obligaciones?

¿Qué documentos jurídicos los reglamentan?

PRESENTACIÓN

¿Qué autoridad es la competente para conocer de algún asunto de su interés?

¿Dónde se tramitan las reclamaciones por violaciones a los derechos?

¿Cuáles son los recursos legales con que cuenta el ciudadano mexicano para ejercer sus derechos y hacer cumplir las obligaciones de otros?

Los treinta títulos que componen esta serie editorial, la primera de este tipo que realiza la Cámara de Diputados, fue escrita por especialistas, maestros y doctores en leyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; tienen asimismo como objetivo primordial contribuir con la promoción de la educación y la cultura jurídica de nuestro país, además de que explican, con claridad, los derechos:

- del arrendador
- del arrendatario
- de los campesinos
- del consumidor
- de los contribuyentes
- de los creyentes
- de los detenidos y sujetos a proceso
- de los enfermos mentales
- de los extranjeros
- del hombre y la mujer divorciados
- de los homosexuales
- de los inmigrantes
- de los internos del sistema penitenciario mexicano
- en relación con el medio ambiente
- de los menores trabajadores

- de las mujeres trabajadoras
- de los niños
- de los padres e hijos
- de los patrones
- del pensionado y del jubilado
- del personal de la salud
- de las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida
- del propietario
- del trabajador asalariado
- del trabajador de confianza
- de los trabajadores domésticos
- de los usuarios de la banca
- de los usuarios de los servicios de salud

Además:

- ¿Qué es el derecho?
- Lenguaje y derecho

Es un esfuerzo editorial que nos permitirá no solamente ser mejores ciudadanos, sino también colaborar con las autoridades de todas las ramas y tener un panorama más claro, más crítico y mejor informado de los derechos que protegen a los mexicanos.

La Cámara de Diputados agradece al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México su participación en la elaboración de esta obra y la colaboración de sus investigadores, quienes redactaron cada uno de los cuadernillos de manera accesible para el público en general, asimismo agradece a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autó-

PRESENTACIÓN

noma de México las ilustraciones que se integran y que permiten al lector hacer más amena la lectura.

Confiamos en que la edición de la obra Nuestros Derechos contribuirá a fortalecer la cultura jurídica de la sociedad en bien de nuestro derecho y del país.

CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN

AMABLE LECTOR:

Uno de los grandes problemas de México es la aplicación de la ley. A lo largo de nuestra historia, los mexicanos hemos dado una intensa lucha para hacer valer la ley. La primera parte de esa lucha se orientó a encontrar en el derecho una defensa eficaz contra la arbitrariedad. Y se estaba en lo correcto. Por eso fue precisamente en nuestro país donde surgió el juicio de amparo, a mediados del siglo XIX. Con el amparo apareció un instrumento adecuado para la defensa de los derechos individuales y colectivos. La otra parte de esa lucha ha consistido en hacer que se cumpla lo que la ley dispone.

Pero la vida de una sociedad no la resuelven las leyes por sí solas. Las mejores leyes son inútiles si no van acompañadas de su conocimiento general. Por eso en la antigüedad griega y romana las leyes solían ser inscritas en cantera o en bronce, para quedar expuestas públicamente, de suerte que quienes supieran leer ilustraran a quienes no tuvieran la posibilidad de enterarse por sí mismos.

La publicidad de las leyes es uno de los más importantes derechos de la sociedad. En nuestro país, desde el gobierno del presidente Benito Juárez, se estableció el *Diario Oficial*, a través del cual, día con día, nos enteramos de las nuevas normas, o de las modificaciones a las existentes. En cada estado y en el Distrito Federal existen también medios de difusión para sus propias disposiciones jurídicas. Es tan importante la publicidad de las normas (códigos, leyes, decretos, circulares, entre otros) que sin el requisito de publicación no son aplicables.

AMABLE LECTOR

Son varias las razones para hacer de la publicidad de las normas un requisito de aplicabilidad, pero la más importante consiste en que todos los destinatarios de la ley conozcan sus derechos, para ejercerlos, y sus obligaciones, para cumplirlas. Existe un principio según el cual la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. De esta manera, nadie puede alegar que no cumple con una disposición por el hecho de no conocerla. Sin embargo, sucede que, al contrario, muchas veces hay derechos que no se ejercen porque no se les conoce.

Para auxiliar a personas en circunstancias adversas, la Constitución contiene algunas importantes disposiciones: en materia penal se tiene derecho a escoger defensor y, si no se hace por cualquier causa, el Estado provee uno de oficio. De esta manera se asegura que aun sin tener conocimientos de derecho —entre ellos el de disponer de un defensor—, las personas cuenten con asistencia profesional adecuada. Otra disposición consiste en que los jueces, en ciertas circunstancias, están obligados a suplir las deficiencias que presentan las demandas de justicia. Los casos en que esto ocurre, por supuesto, se encuentran limitados a aquellos en los que se supone que las condiciones económicas y culturales de las personas no les permiten disponer de la información necesaria para ejercer sus propios derechos. Otro aspecto relevante es el que garantiza que los indígenas sean apoyados para acceder a los órganos de impartición de justicia, y que en algunos casos incluso sean tomadas en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas.

También existen en el país numerosas instituciones, federales y estatales, cuyo objetivo consiste en orientar a la población en trámites y gestiones de naturaleza legal. Está pendiente, sin embargo, un mayor esfuerzo de sistematización del trabajo que llevan a cabo esas instituciones,

para ofrecer a la población un instrumento efectivo de acceso a la justicia. El excesivo número de formalidades, la complejidad del sistema judicial, la falta de un amplio programa de apoyo a los ciudadanos y la ausencia de una cultura jurídica, hacen que el pleno acceso a la justicia sea una meta todavía por alcanzar.

Ahora bien, sólo en cuanto concierne a la información jurídica, se sabe que en México tenemos enormes carencias. Ni siquiera los cursos de civismo que se imparten en las escuelas son suficientes para satisfacer la necesidad de información en esta materia, porque el derecho cambia con gran frecuencia.

Las modificaciones que se producen en el ámbito jurídico suelen ser necesarias. Esto no excluye que a veces se omitan las que se requieren, y que se introduzcan algunas que resultan inconvenientes. Pero este es otro tema. El hecho fundamental es que en ninguna sociedad el derecho permanece estático, inmutable. Nuevos problemas, o nuevas soluciones para problemas conocidos, hacen que el legislador procure atender las expectativas y las exigencias sociales a través de reformas a las leyes existentes, o incluso de leyes nuevas.

En el Estado moderno la actividad legislativa es muy intensa. Como en otras áreas profesionales, los abogados también se han tenido que ir especializando, en virtud de la complejidad del orden jurídico. El abogado generalista, como en el siglo XIX, ya no existe.

Ahora bien, el derecho es un instrumento esencial para la convivencia social; las reglas jurídicas son consideradas como el mínimo ético indispensable para asegurar las relaciones entre las personas. Siendo así, es indispensable que las normas que rigen la vida de una sociedad sean conocidas lo más ampliamente posible. El mejor y mayor

AMABLE LECTOR

conocimiento de las normas tiene, en todas partes, una consecuencia directa: consolida el Estado de derecho.

Por Estado de derecho se entiende la sujeción de los órganos del poder al derecho, de suerte que sus actos siempre sean previsibles, controlables y enmendables, al mismo tiempo que los derechos de cada individuo y de la sociedad siempre estén eficazmente protegidos. Pero ocurre que las personas no sólo tenemos derechos que ejercer y obligaciones que cumplir con relación al Estado; también los tenemos ante los demás miembros de la sociedad, incluidos obviamente los de nuestras familias. Aunque, como dije más arriba, la ignorancia del derecho no exime de su acatamiento, es evidente que donde los derechos no son conocidos, tampoco son ejercidos.

El conocimiento generalizado de los derechos y de las obligaciones, así como de las prácticas y costumbres a las que se atribuye una función razonable y relevante en la vida colectiva, se denomina cultura jurídica o cultura de la legalidad. En tanto que aumente esta cultura, tenderán a disminuir los comportamientos arbitrarios de la autoridad y de los miembros de la sociedad. Vigilar a la autoridad y sabernos defender ante ella, pero también cumplir con las obligaciones que hayamos contraído con otras personas, es una de las más eficaces formas de consolidar el orden jurídico.

Muchas personas ven la ley como algo distante y difícil de entender. En numerosos casos tienen razón, pero en términos generales el derecho no es sino un conjunto de reglas que derivan del sentido común. Cuando una norma está bien redactada, no tiene por qué ser complicada; la complejidad de ciertas normas resulta en todo caso de la naturaleza de la materia regulada. Eso ocurre, por ejemplo, con las disposiciones fiscales, o con muchas que atienden a materias eminentemente técnicas. Pero en ge-

neral las normas que mayor interés representan para la mayoría de las personas son de lectura más o menos accesible. Este es el caso de la Constitución federal y de las Constituciones de los estados.

En este sentido es altamente recomendable la lectura de la Constitución. A lo largo de los años se han hecho importantes esfuerzos para que el texto constitucional sea lo más accesible posible para el mayor número de mexicanos. Prácticamente han sido utilizados todos los medios que en cada momento han sido considerados de mayor efecto general, para dar a conocer el texto constitucional. En el siglo XIX, por ejemplo, eran frecuentes los folletos denominados “catecismo constitucional”, mediante los que se explicaba el contenido de la norma suprema. Ocurrió, sin embargo, que en aquella época la desorientación no provino de la falta de esfuerzos por difundir el contenido de las Constituciones, sino porque las Constituciones mismas presentaron dos problemas: su sustitución era muy frecuente y su aplicación era muy rara.

En cuanto a la actual Constitución, de 1917, se han hecho desde ediciones comentadas hasta explicaciones con el auxilio de caricaturas. El problema ahora consiste en que la Constitución cambia con excesiva frecuencia, y esto impide “fijar” un texto al que se le pueda dar amplia difusión.

Pero ocurre que además de la Constitución, existen numerosas disposiciones que influyen en la vida individual y colectiva de los mexicanos. Y mientras que es posible —y deseable— que el mayor número de personas lea directamente la Constitución, que después de todo es bastante breve, no es fácil que lean una multiplicidad de leyes y códigos, esos sí destinados a ser manejados por expertos.

Ante la necesidad de contribuir a la cultura jurídica, la Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Ju-

AMABLE LECTOR

rídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México decidieron realizar una serie de trabajos, uno de los cuales es el que usted tiene en sus manos, para explicar de manera accesible distintos aspectos del derecho. La coordinación de la colección ha correspondido a la maestra Marcia Muñoz de Alba, y el diseño editorial al licenciado Raúl Márquez Romero, ambos miembros del personal académico del Instituto. El doctor Sergio López-Ayllón, secretario académico, ha contribuido con valiosas sugerencias.

Este texto ha sido redactado por un experto. Quien desee profundizar en la materia, cuenta con referencias bibliográficas adecuadas. Se ha tenido en cuenta recomendar la lectura de obras actualizadas y disponibles en las librerías, no sólo en las bibliotecas.

Para hacer más amena la lectura de este volumen contamos con las ilustraciones del maestro Eduardo Antonio Chávez Silva, director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, y de Alejandro López-Araiza Larroa, de la misma Escuela. Para ambos un testimonio de gratitud por el entusiasmo con que realizaron su trabajo.

Agradezco su contribución al autor de este texto. Aunque la selección del tema fue acordada entre la Cámara y el Instituto, su desarrollo fue realizado con entera libertad por el autor. Se trata de un esfuerzo pionero de difusión del derecho, que abre una nueva vertiente a la labor de los juristas mexicanos. Además de las obras de carácter científico, es necesaria la elaboración de obras de difusión del derecho que contribuyan a consolidar el respeto por la ley y, por lo mismo, a mejorar los niveles de convivencia entre los mexicanos.

La arbitrariedad, la corrupción y la violencia son el alto precio que las sociedades pagan cuando la mayoría de sus miembros no conocen sus derechos y sus obligaciones. Es indispensable que hagamos un gran esfuerzo para su-

AMABLE LECTOR

perar esa deficiencia. Por esta razón, en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas expreso un amplio reconocimiento a la Cámara de Diputados, gracias a cuya confianza y decidido apoyo ha sido posible la realización de esta obra y de la colección de la que forma parte.

Diego VALADÉS
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Nacional Autónoma de México

*A Irmity, mi madre, quien
quedó dormida, tal vez so-
ñando, justo el día en que
concluí este trabajo. Siem-
pre estarás en mí.*

I. INTRODUCCIÓN

Cuando el doctor Diego Valadés, director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, me invitó a redactar este trabajo como el primero del proyecto que tan atinadamente coordina mi querida amiga y colega la maestra Marcia Muñoz de Alba, conjuntamente con la Cámara de Diputados, me sentí sumamente honrado y especialmente motivado.

Justo en aquellos días, Immer Flores y yo habíamos dado una charla sobre el pensamiento de Hermann Kantorowicz, dentro de un diplomado sobre los Clásicos de la Filosofía y la Teoría del Derecho organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con asombrosos resultados por lo sugerente que fue el “redescubrimiento” del pensamiento de este autor para muchos de los participantes.

Curiosamente había varios paralelismos entre la lectura de Kantorowicz que expuse en el diplomado (“La definición del derecho”) y el tema que me correspondía desarrollar para la colección Nuestros Derechos (*¿Qué es el derecho?*): el trabajo de Kantorowicz había sido pensado como el primero de una serie de estudios que constituirían una obra colectiva denominada *Oxford History of Legal Science*, cuya coordinación estaba a su cargo y que lamentablemente no pudo ver la luz debido a su muerte. Un segundo paralelismo estribaba en el tema: “La definición del derecho”, por un lado y “¿qué es el derecho?” por el otro; el tercer y último paralelismo, de naturaleza menos anecdótica, consistía en mi convergencia con Kantorowicz respecto a la necesidad de romper los hábitos mentales desde los que pen-

NUESTROS DERECHOS

samos del derecho mediante la sustitución de un enfoque metafísico, por otro de naturaleza lingüística.

En todo caso, la amable invitación me brindaba la oportunidad de plasmar por escrito algunas de las ideas que han constituido el eje central de mis clases durante los últimos años y que, a juzgar por las reacciones de mis alumnos y el impacto de Kantorowicz, parecen satisfacer una necesidad de quienes están interesados por comprender el derecho desde una perspectiva distinta.

Sin embargo, también había notorias diferencias; de las cuales, la más relevante consistía en que mientras el proyecto editorial de Kantorowicz estaba dirigido a especialistas, la colección de cuadernillos es una obra de carácter eminentemente divulgativo, lo que implicó algunas dificultades adicionales: debía proporcionar una visión del derecho que incorporara los avances de la teoría jurídica contemporánea, sin profundizar en el pensamiento de sus principales expositores; estar escrita en un estilo accesible para cualquier persona de cultura media, lo cual no es fácil tratándose de trabajos filosóficos; debía proporcionar a los lectores legos en derecho las herramientas conceptuales básicas para comprender las nociones del derecho.

Una dificultad especial derivada de mi formación académica, radicaba en tener que abordar un tema clásico de la postura que hace tiempo combato, ya que, junto con Kantorowicz y muchos otros, creo que

la pregunta ¿qué es el derecho? es la fuente principal de nuestra incapacidad para comprender con claridad lo que se quiere decir cuando se habla de derecho, así como de los infructuosos debates iniciados hace siglos e incluso milenios alrededor de la problemática en cuestión.

No obstante, como no hay mal que por bien no venga y en congruencia con mis propias concepciones, abordo el tema de manera crítica.

El itinerario seguido a lo largo del trabajo arranca con una exposición sobre la forma en que aun sin saberlo realizamos actos jurídicos durante nuestra vida cotidiana y la forma en que mediante ellos participamos en los procesos de construcción de nuestra realidad social. En el apartado “Derecho y realidad social”, correspondiente al cuadernillo *¿Qué es el derecho? Iniciación a una concepción lingüística*, primer volumen de la colección Nuestros Derechos, se expone la problemática que trae aparejada la pregunta ¿qué es el derecho?, y las razones por las cuales es mejor sustituirla por un enfoque de naturaleza lingüística que en lugar de inquirir por el significado de la expresión mediante entidades metafísicas. Partiendo del hecho de que la palabra “derecho” tiene diferentes significados (es decir, está afectada de ambigüedad), se determinan diversos significados básicos que son analizados durante el resto de ese primer cuadernillo.

En el capítulo segundo de *¿Qué es el derecho? Iniciación a una concepción lingüística*, se exponen algunos conceptos elementales de análisis del lenguaje necesarios para abordar el problema del significado del término “derecho” y se analizan seis significados distribuidos en dos grandes categorías que son: “derecho” desde el punto de vista de las concepciones iusnaturalistas en los pensamientos metafísicos: 1) clásico (helénico); 2) escolástico (medieval) y 3) racionalista (moderno) ; y “derecho” desde una concepción positivista que comprende tanto la 4) “historicista” como a la 5) “sociologista” y a la 6) “normativista”. El resto del trabajo se desarrolla dentro de la concepción normativista por ser la que se presupone por la mayoría de los temas que se abordarán en la colección.

NUESTROS DERECHOS

Con respecto a este cuadernillo, intitulado *Los sentidos del "derecho"*, inicio con el análisis de las "células" constitutivas del derecho: las normas jurídicas. Dado que éstas son un tipo especial de normas y las normas un tipo especial de enunciados (oraciones) por las cuales se indica a un sujeto o clase de sujetos efectuar cierta conducta, primero expongo qué es un enunciado y cuáles son sus principales tipos, resaltando entre ellos a los prescriptivos, debido a que la mayor parte de las normas corresponden a este tipo. Acto seguido procedo a analizar la estructura de las normas en general y concluyo con una caracterización específica de las normas jurídicas.

En el siguiente abordó el significado de la palabra "derecho", entendiéndola como sinónimo de "derecho objetivo". Para ello me apoyo en lo expuesto previamente, ya que un sistema jurídico no es otra cosa sino la forma en que se organizan diferentes normas jurídicas. Dado que hablar de derecho objetivo es prácticamente lo mismo que hablar de sistema de normas jurídicas, me ocupó de explicar qué quiere decir que el derecho es un sistema de normas. Para finalizar, expongo el problema de la existencia de un sistema jurídico, con lo que finalizo el tratamiento del significado de "derecho objetivo" sin antes decir algo sobre la disfuncionalidad del derecho debida a fenómenos tales como la corrupción o la inobservancia de sus normas de manera sistemática (anomia). Por cierto, dado que la característica diferencial más importante de las normas jurídicas respecto de otras es su pertenencia a un sistema, este apartado permite concluir la definición de "norma jurídica".

El apartado quinto lo he consagrado al significado del término "derecho" entendido como sinónimo de "derecho subjetivo", apoyándome en lo establecido en el apartado anterior, ya que jurídicamente hablando alguien puede decir que tiene un derecho únicamente cuando existe una

norma jurídica que se lo concede, lo que a su vez implica la existencia de un sistema jurídico. Como el término “derecho subjetivo” forma parte de un sistema de términos interdefinibles a los que se suele aludir con el nombre de “conceptos jurídicos fundamentales”, se exponen someramente dichos “conceptos”, lo que me permitió abordar los distintos significados de “derecho subjetivo”.

En el último apartado me hago cargo del significado de “derecho” como sinónimo de “ciencia del derecho”. Su comprensión presupone tanto a los apartados de este cuadernillo como al cuadernillo *¿Qué es el derecho? Concepción lingüística*, debido a que el material sobre el que se construyen las llamadas “teorías jurídicas dogmáticas” son sistemas normativos concretos que determinan del uso que se puede dar a los conceptos jurídicos fundamentales en la práctica de un derecho dado.

Los elementos básicos para la comprensión del resto de los números de la colección se encuentran expuestos en los tres últimos puntos, toda vez que en ellos se abordarán diferentes ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano, los cuales están constituidos por normas jurídicas del propio sistema, determinantes del uso adecuado que se pueda dar a los conceptos jurídicos fundamentales en nuestro país por parte de sus titulares. El último apartado permitirá comprender más cabalmente la naturaleza de los trabajos que constituyen la colección, pues cada cuadernillo es un estudio de “dogmática jurídica” o “ciencia del derecho”, dirigido a hacer ver a sus lectores algo más que lo que podrían ver como buen hombre de la calle, aunque tuvieran enfrente los mismos textos legales analizados en un cuadernillo.

Antes de concluir esta introducción deseo manifestar mi satisfacción por el hecho de participar en un proyecto que tiene como aval, además de mi casa académica que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Cámara de Diputados.

NUESTROS DERECHOS

II. EL DERECHO COMO SISTEMA DE NORMAS

1. *Lenguaje, realidad y derecho*

A. *Crónica marciana*

¡Bloop! ¡Bloop! ...la textura gelatinosa de la habitación había sido traspasada por dos entes fluorescentes tan amorfos como un malvavisco a medio derretir. Una vez ahí, comenzaron a perseguirse y traspasarse uno al otro produciendo una réplica de sí mismos después de cada cruce. Cuando hubieron completado un número de réplicas idénticas para cada uno en un total de 20, comenzaron a gravitar y se fusionaron a media distancia entre el suelo y el techo de tal suerte que, a pesar de estar unidos, podían distinguirse unos de los otros; acto seguido empezaron a emitir al unísono una serie de sonidos en un rango de decibeles imposible de ser percibido por los humanos, cuya traducción es más o menos la siguiente:

Lo que encontramos en la Tierra fueron dos grupos de replicados que sumaban 22, que al parecer no podían gravitar ni fusionarse y que por más que intentaban traspasarse lo único que lograban era descargar su frustración golpeando un cuerpo rodante de un extremo al otro del espacio de concentración en el que se encontraban.

Lo que pretende poner de relieve esta pequeña historia, es que muchas de nuestras actividades pueden ser realizadas con un sentido coherente y ser comprendidas si y sólo si contamos con el esquema de interpretación resultante de conocer las reglas que las rigen.

Ante el desconocimiento de las reglas del fútbol, los marcianos de nuestro ejemplo se encuentran tan imposi-

bilitados de comprender lo que hacían los 22 “replicados” pateando el cuerpo rodante, como nosotros para entender qué significado pudiera corresponder a su juego de los traspasos y las fusiones.

La conclusión es que al menos cierto tipo de reglas que rigen algunas de nuestras actividades cumplen una función constitutiva ya que hacen surgir en el mundo cierta clase de realidad que sin ellas sería imposible pensar.

¿Acaso podríamos concebir el ajedrez sin sus reglas, entender el significado de los movimientos observados en una partida o participar en ella? ¿palabras tales como “jaque”, “jaque mate”, “enroque”, etcétera, ¿podrían, denotar algo en el mundo fuera del mundo del ajedrez, sin perder su significado original? Evidentemente, *no*.

2. *Nacho el gacho*

Imagine el lector que, en calidad de observador imparcial, presencia parte de la rutina cotidiana de Nacho, un siniestro personaje al que encuentra durante la mañana en una habitación contigua a otra en la que se encuentra un sujeto sentado en una silla eléctrica. Ante una inclinación de cabeza de otro individuo, Nacho acciona la palanca que activa la descarga eléctrica que despiadadamente quita la vida al pobre infeliz atado a ella. Tras haberse cerciorado del fallecimiento de su víctima, Nacho se quita la bata blanca y se retira del lugar despidiéndose amigablemente de los policías que resguardan la entrada del recinto.

NUESTROS DERECHOS

Suponga que durante la noche, encuentra a Nacho en la misma habitación, quien repite exactamente el mismo rito produciendo la muerte de otro individuo; sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en la mañana, los policías irrumpen en la habitación, esposan a Nacho y se lo llevan detenido.

Habiendo acontecido exactamente los mismos hechos, ¿qué ha producido la diferente reacción por parte de los policías? De los elementos a la vista no parece desprenderse ninguna explicación.

Si preguntáramos a uno de los policías qué es lo que ha ocasionado tan diferente reacción, su respuesta podría ser la siguiente:

En la mañana Nacho privó de la vida a un sujeto que había sido sentenciado a la pena de muerte, desempeñando su papel de verdugo, o sea, en calidad de funcionario del Estado, lo que determinó que su acción fuera absolutamente legítima e incluso obligatoria, pues si no hubiera ejecutado al reo se hubiera hecho acreedor a una sanción por falta de cumplimiento a sus obligaciones como funcionario público, en términos de lo establecido por la Ley.

Sin embargo, durante la noche, Nacho privó de la vida a un individuo como miembro de una secta asesina, aprovechando el acceso que tenía a las instalaciones del lugar de ejecución. En este supuesto, el mismo acto constituyó el delito de homicidio, de conformidad con lo establecido en el Código Penal y lo detuvimos en flagrancia, según lo establecido en el Código de Procedimientos Penales.

Moraleja: no es necesario ser marciano para comprender que no son los hechos los que determinan nuestros esquemas de comprensión, sino que en algunas ocasiones son nuestros esquemas de comprensión los que determinan lo que podemos percibir como hechos.

3. *Mentes, discurso y programación*

Si los esquemas de interpretación determinan lo que podemos percibir como hechos de cierta categoría, la pregunta siguiente es: ¿de dónde surgen dichos esquemas? La respuesta a esta pregunta es sumamente compleja y no es posible detenernos a responderla aquí. Sin embargo, una de las variables que juega un papel fundamental en la integración de los mismos radica en el lenguaje. En efecto, si recordamos la primera vez que nos enfrentamos a un juego de mesa, resulta evidente que la diferencia entre comprenderlo o no, radica en haber aprendido sus reglas, normalmente expuestas en un instructivo adjunto o el dorso de la caja o, en su defecto, nos son comunicadas verbalmente por alguien que ya las conoce.

Conocer las reglas que regulan cierta actividad no sólo es necesaria para comprender un aspecto del mundo, sino que es la base para participar en la acción, algo similar a lo que sucede con el libreto de una obra de teatro, condición necesaria para que la actividad de los actores acontezca en una serie de interacciones con significado coherente.

Con el derecho ocurre lo mismo que con los juegos o el libreto de una obra de teatro:

El derecho constituye esquemas que son condición para poder pensar, comprender y predecir de ciertos acontecimientos del mundo, así como para participar activamente en el mismo. De igual manera, la fuente de esos esquemas está en el lenguaje, pues conforme a la definición que estamos exponiendo, "derecho" significa un sistema de normas de cierta índole, las cuales son una clase de proposiciones lingüísticas. Veámoslo detenidamente.

NUESTROS DERECHOS

III. DEFINICIÓN DE “NORMA JURÍDICA”

1. *Clasificación de enunciados*

Analice con atención los siguientes enunciados:

- “La nieve es blanca”.
- “Dieguito, Clemente, David, Frida: ¡Dejen de pintar sobre las paredes!”
- “ Te bautizo con el nombre de ‘Popeye’.”
- “¿A qué hora dijiste que comenzaba la función?”
- “Espero que te vaya muy bien”.

Entre ellos hay importantes diferencias por corresponder a las siguientes clases de enunciados:

Enunciados aseverativos, informativos o descriptivos

Se caracterizan por proporcionar información acerca de algún aspecto del mundo y por el hecho de poder ser evaluados en términos de verdad o falsedad.

“La nieve es blanca” es un ejemplo de los mismos, cuya verdad o falsedad podemos determinar por medio de constatación directa con los hechos; si viendo la nieve (fenómeno denotado por “nieve”) resulta que efectivamente ella es de color blanco, entonces el enunciado es verdadero y será falso en caso contrario.

Enunciados prescriptivos

A diferencia de los anteriores, no buscan describir o proporcionar información acerca del mundo, sino hacer que alguien se comporte de cierta manera.

De los enunciados prescriptivos no se puede predicar verdad o falsedad, sino, en todo caso, que son válidos o inválidos, justos o injustos, racionales o irracionales, operativos o inoperativos, etcétera.

Bajo el rubro de enunciados prescriptivos, se oculta una gran variedad de acciones lingüísticas como ordenar, suplicar, aconsejar, sugerir, solicitar, pedir, invitar, incitar, etcétera.

“Dieguito, Clemente, David, Frida: ¡Dejen de pintar sobre las paredes!”, es un ejemplo de esta clase de enunciados, pues en él se ordena realizar cierto tipo de conducta consistente en dejar de pintar las paredes.

Enunciados performativos

Los enunciados performativos se caracterizan porque, a diferencia de los anteriores, no describen algún aspecto del mundo, ni indican a alguien que se comporte de cierta manera, sino porque al emitir el enunciado, se produce un cambio en el mundo.

Por ejemplo, al decir “te juro que...” no estoy describiendo el hecho de haber jurado, ni prescribiendo a alguien

NUESTROS DERECHOS

que efectúe un juramento, sino que, al emitir “te juro”, ¡estoy jurando! Expresiones del mismo tipo son: “te prometo”, “sentencio”, “condeno”, etcétera.

Los criterios de evaluación de estos enunciados son las categorías de afortunado y desafortunado, siendo un enunciado performativo afortunado el que efectivamente produce el cambio en el mundo y desafortunado el que no lo produce.

Así como la verdad o falsedad de los enunciados descriptivos presupone criterios de verdad (por ejemplo, la concordancia entre el enunciado y algún aspecto del mundo) y la calificación de los prescriptivos de cierta concepción valorativa (que un enunciado que indique realizar una conducta sea justo o injusto dependerá de la definición de “justicia” que adoptemos),

la afortunabilidad o desafortunabilidad depende de que se satisfagan ciertas condiciones como que el sujeto que emite el enunciado pertenezca a cierta categoría o que los efectos performativos deseados no hayan tenido lugar previamente, entre otros.

Por ejemplo, el enunciado “Los declaro marido y mujer” será desafortunado si quien lo emite no es un juez, sino un actor o un amigo que está gastando una broma, y tampoco será afortunado si uno de los supuestos consortes ya se encuentra casado.

“Te bautizo con el nombre de ‘Popeye’ ”, es un ejemplo de enunciado performativo que, de ser afortunado, habrá producido un cambio por el cual, a partir de su emisión, el barco en cuestión será “El Popeye”.

Enunciados interrogativos

Como su nombre indica, los enunciados interrogativos son aquellos por los que se formula una interrogación. Para algunos constituyen un caso especial de los prescriptivos ya que implican una solicitud de información. Un ejemplo de los mismos lo tenemos en: “¿A qué hora dijiste que comenzaba la función?”

Enunciados expresivos

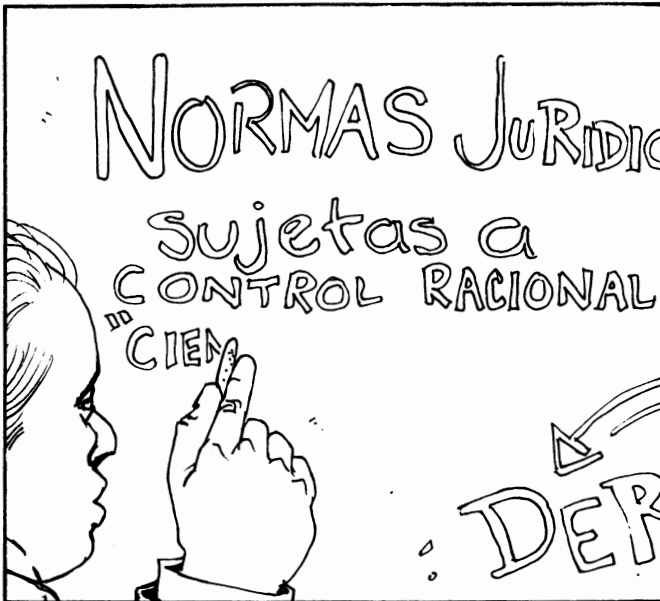
Su función estriba en exteriorizar estados de ánimo. A pesar de que no es frecuente referir criterios de evaluación de los mismos, solemos calificarlos como sinceros o no sinceros, según efectivamente correspondan o no a los estados internos manifestados.

“Espero que te vaya muy bien”, es un ejemplo de estos enunciados.

2. Tipos de enunciados y funciones lingüísticas

De lo expuesto anteriormente parece desprenderse que la forma de cada tipo de enunciado es determinante de la función que cumplen, de tal suerte que un enunciado descriptivo siempre cumple la función de afirmar (o negar) algo sobre el mundo, uno prescriptivo indica qué conducta hay que efectuar, etcétera.

NUESTROS DERECHOS



Sin embargo,

la forma de los enunciados no es una garantía infalible de la función, pues puede acontecer que enunciados de una determinada clase, cumplan una función lingüística correspondiente a la de otra categoría.

Por ejemplo, un enunciado emitido un sábado por la noche sobre avenida de los Insurgentes del tipo: "Este restaurante está a reventar" tiene una estructura descriptiva cuya función inmediata es la de describir el estado que guarda el lugar, sin embargo, considerando el contexto en que es emitido, puede cumplir una función prescriptiva equivalente a: "¡Busquemos otro restaurante!"

De la misma manera puede acontecer con un enunciado del tipo: "Si quieres que el agua entre en ebullición, sométela a más de 100° C de temperatura", que tiene la forma de un enunciado prescriptivo, constituye una manera indirecta de describir: "El agua entra en estado de ebullición si se le somete a más de 100° C". Un enunciado de forma interrogativa que cumple una función descriptiva sería el siguiente: "¿Volviste a comer tacos, verdad?", como forma indirecta de describir: "Otra vez tienes infección intestinal"; y lo mismo podría decirse del enunciado de forma descriptiva: "Estoy esperando una explicación" proveniente del padre a la hija que ha llegado de una fiesta más tarde de lo acordado y que podría entenderse como una manera indirecta de decir "¿Me puedes explicar por qué llegas a esta hora?"

Como puede observarse, la función de un enunciado concuerda con su forma cuando lo consideramos de modo abstracto, o sea, sin ponerlo en un contexto lingüístico determinado. Cuando esto sucede (al regresar de una fiesta; buscando restaurante para cenar, etcétera), la forma es un indicador importante, pero en última instancia, ésta deberá ser determinada atendiendo al contexto general.

Las consideraciones hechas en este apartado son relevantes para comprender el significado de "derecho" en la concepción normativista, porque, como hemos dicho, las normas jurídicas constituyen una especie de normas, las cuales a su vez son enunciados de cierto tipo.

NUESTROS DERECHOS

3. *Elementos necesarios de la definición de "estructura normativa"*

Generalmente se considera que las normas son una especie de enunciados prescriptivos que pueden ser de diferentes clases: normas morales, normas religiosas, normas de etiqueta, normas jurídicas, etcétera.

Afirmar que las normas son una especie de enunciados prescriptivos implica sostener que poseen ciertas características que las distinguen de las demás prescripciones.

Un criterio de diferenciación radica en su estructura constituida por los elementos siguientes:

A. Una determinada acción o actividad cuya realización es prescrita

Debe resaltarse que la diferencia entre los términos "acción" y "actividad" radica en que la primera denota una conducta aislada, mientras que la segunda denota a un proceso o serie de acciones.

Por ejemplo, de una norma que contiene la expresión "pagar" se diría que contiene una acción que se agota en un acto consistente en hacer entrega del bien o bienes a que el destinatario de la norma está obligado, mientras que una norma que contiene la expresión "realizar la investigación de los delitos" prescribe una actividad, ya que la investigación implica una serie de acciones como tomar la declaración a quien ha sido víctima de un delito, solicitar a los peritos la realización de los dictámenes correspondientes, tomar las declaraciones testimoniales, girar cita-

torio a los probables responsables u ordenar su detención, etcétera.

Debe hacerse notar que la palabra “acción” está afectada de ambigüedad. En sentido coloquial significa una conducta positiva, como puede ser cantar. Sin embargo, también tiene significados en el ámbito del derecho distintos a aquél, pudiendo significar no sólo conductas positivas, sino también negativas o abstenciones (por ejemplo, la acción “no privar de la vida a otro”) y también puede denotar actividades complejas compuestas de varias acciones como sucede en el caso de “realizar la investigación del delito”.

B. La calificación “deóntica” o normativa de la acción

Constituye una propiedad fundamental de las normas que las conductas que prevén se encuentren calificadas por alguna de las siguientes expresiones: obligado o debido, permitido y prohibido; o, en sustantivo: obligación o deber, permisión y prohibición.

Aunque normalmente no se incluye dentro de estos términos llamados operadores deónticos, agregaré en este trabajo un operador más que denominaré “tener que”.

La calificación de las acciones o actividades normativas, puede ejemplificarse de la manera siguiente: “deberá pagar sus impuestos...”, en donde “deber” califica a “pagar”, esto es, la acción “pagar” es “debida”; “podrá (se le per-

NUESTROS DERECHOS

mite) pagar los derechos correspondientes a la tenencia del automóvil...”, o sea, que se permite optar por dos alternativas para realizar el pago; “está prohibido estacionarse en lugar donde se encuentre un disco con una ‘E’ encerrada en un círculo y atravesada por una línea diagonal”, o sea, que la conducta estacionarse en las condiciones indicadas está prohibida; por último “quien quiera obtener una licencia para portar armas tendrá que presentar la siguiente documentación:...”, la cual indica que si se quiere obtener un cambio de estatus jurídico se tienen que realizar ciertas acciones (entregar la documentación referida).

Como veremos más adelante, la forma en que las acciones o actividades son calificadas normativamente implica importantes consecuencias.

C. Modalidades de realización de la acción o actividad deónticamente calificada

Como sucede en los juegos, para que en el mundo del derecho una acción o conjunto de acciones puedan tener el efecto previsto, habrán de ser realizadas en ciertas circunstancias espacio-temporales y/o de modo específico.

Parte de la estructura de las normas consiste en indicar esas modalidades.

Por ejemplo:

La declaración patrimonial deberá ser presentada durante el mes de mayo (modalidad temporal), en las oficinas de Secodam o en los módulos que se establezcan para tales efectos en las diferentes dependencias del Ejecutivo (modalidad espacial) presentando debidamente cumplimentado el formato T-K-CH/666 (modalidad especial).

LENGUAJE Y DERECHO

Las modalidades de realización no únicamente son de carácter general como acontece cuando en una sentencia indica una fecha y lugar específico para el cumplimiento de una acción obligatoria específicamente determinada.

D. *Sujeto normativo*

El sujeto normativo es el objeto de la prescripción cuya acción a actividad se requiere.

Por lo regular, los sujetos normativos son denotados por términos generales como: “Los comerciantes”, “contribuyente”, “servidor público”, “arrendador”, “arrendatario”, etcétera.

Su definición puede ser realizada a partir de la conducta que realizan (es “arrendador” el dueño de un bien que renta a otro y “arrendatario” quien lo renta) o en función de determinada característica diferente a la acción o actividad (son “mayores de edad” quienes tienen más de 18 años).

Sin embargo, también es posible que haya normas en las que el sujeto corresponda a una persona individualmente considerada. En el derecho, es el caso de las sentencias en las que la acción deónticamente calificada ha de ser realizada por un sujeto individualizado en las condiciones establecidas en la resolución judicial. Por ejemplo, cuando se condena al señor Iván de la Carrera, a pagar al señor Tomás Madrazo la cantidad de 20,000 pesos por concepto de indemnización por el daño en propiedad ajena causado al automóvil del segundo, así como los gastos ocasionados por el juicio.

NUESTROS DERECHOS



E. Condiciones de activación normativa

Las condiciones de activación normativa constituyen las circunstancias que, de ser verificadas en la realidad social, determinarán que se active una estructura normativa concreta. Por ejemplo, el hecho de que alguien sea de sexo masculino, mayor de edad y físicamente apto, determina que para él se active la obligación consistente de prestar su servicio militar durante un año, en las instalaciones correspondientes a su jurisdicción, asistiendo todos los sábados de tal hora a tal otra.

4. *Elementos periféricos a las normas*

A. *Emisor o autoridad*

Aunque no forma parte de la estructura constitutiva de las normas,

es frecuente considerar que siempre provienen de un emisor, ya sea una entidad teológica como Dios, o de otra como el Estado, cuya voluntad de hacer que otro realice determinada conducta se exteriorice a través de la norma.

Esta consideración genera problemas al momento de caracterizar a las normas morales que surgen como resultado de la simple interacción social y no tienen identificado a un emisor cuya voluntad exteriorice.

Por cierto, la diferencia entre normas morales y los hábitos comunitarios radica en que en caso de que se viole lo dispuesto por las primeras, hay una reacción de desaprobación social, a diferencia de lo que acontece con las segundas que no son constitutivas de normas, sino de meras coincidencias sociales. Por ejemplo, la conducta de alguien que se niega a hacer caso a una anciana que le pide ayuda para atravesar la calle, sería reprochable por inmoral. Sin embargo, la conducta de alguien que se comportara contrariamente a la costumbre social de ir al cine en sábado, no podría ser reprochada.

NUESTROS DERECHOS

B. Promulgación

Consiste en la expresión externa de la norma mediante símbolos. Al igual que acontece con la autoridad, la promulgación no forma parte de la estructura normativa, pues podemos encontrar pautas de comportamiento que satisfagan las demás condiciones estructurales de la norma sin que ningún enunciado haya sido formulado expresamente. Por ejemplo, nadie ha promulgado la norma con base a la cual se debe felicitar a las madres el 10 de mayo y, sin embargo, se sobrentiende que hay que hacerlo.

Después de estas consideraciones es fácil distinguir una norma de otras prescripciones como: "Por favor, acompáñame a la presentación de mi libro"; "Te recomiendo que inicies el trabajo final con un mes de anticipación", las cuales no se encuentran deónticamente calificadas.

Como habrá constatado el lector, la mayor parte de los ejemplos empleados en esta sección son jurídicos. Si embargo, no hay ninguna dificultad para pensar en normas de otra naturaleza que también satisfagan las características expuestas. Por ejemplo, el mandamiento católico "Honrarás a tu padre y a tu madre", puede descomponerse de la manera siguiente:

Acción: Honrar al padre y a la madre.
Operador deóntico: obligación ya que significa lo mismo que decir "Tienes la obligación, de amar a tu padre y a tu madre".
Modalidades: En todo lugar y en todo momento.
Condiciones de activación normativa: si tienes madre y/o padre, entonces estás obligado a honrarlos.
Sujeto normativo: Todo hombre.
Emisor: Jehová.

5. Normas jurídicas como enunciados prescriptivos

A. Clasificación por su estructura

Como se indicó anteriormente, los operadores deónticos (permitido, prohibido, obligado, tener que) que califican a las acciones normativas, traen aparejadas diversas consecuencias funcionales y prácticas, lo que hace conveniente diferenciar entre normas jurídicas que imponen *obligaciones*, normas jurídicas que imponen *prohibiciones* y normas jurídicas que establecen *permisiones*. De ellas, las prohibitivas ocupan un lugar preponderante en nuestras asociaciones acerca del derecho.

B. Las normas jurídicas prohibitivas

Una parte importante de su estructura se integra de los siguientes elementos:

- Una acción prohibida o ilícita.
- Una sanción.
- Una relación condicional entre la conducta ilícita y la sanción y que se puede expresar bajo la fórmula: “si el hecho ilícito previsto por la primera parte de la norma tiene lugar, entonces el sujeto normativo deberá ser sancionado en los términos establecidos por la segunda parte”.

Por ejemplo, supongamos la siguiente norma de un código penal: “A quien cometa el delito de homicidio, se le sancionará con una pena de 10 a 20 años de prisión”.

En este caso, el hecho ilícito consiste en llevar a cabo la conducta: cometer homicidio, el cual, una vez realizado,

NUESTROS DERECHOS

activa la segunda parte de la norma, según la cual, el sujeto que cometió la acción deberá ser sancionado con una pena que podrá ir de 10 a 20 años de prisión.

La sanción constituye uno de los elementos que más asociamos al derecho, razón por la cual se ha llegado a considerar la nota diferencial de las normas jurídicas con respecto a otras.

Ello está lejos de ser correcto, ya que existen normas diferentes a las jurídicas que también poseen esta propiedad, como sucede con algunas normas morales que al no ser observadas producen la sanción consistente en el reproche social.

Ante esta situación, se ha llegado a establecer que,

la nota distintiva de las normas prohibitivas jurídicas respecto a otras normas prohibitivas, radica en el hecho de que la sanción sea de índole física e impuesta contra la voluntad del responsable por instituciones creadas por otras normas del sistema jurídico.

C. Normas jurídicas que imponen obligaciones

Partiendo del hecho de que toda conducta tiene un valor opuesto equivalente a su negación, las normas que imponen obligaciones se pueden inferir a partir de la estructura de las normas prohibitivas, lo que podemos expresar de la manera siguiente: una acción es obligatoria cuando es la negación de la acción ilícita.

Por ejemplo, a partir de la norma prohibitiva referida anteriormente: “A quien cometa homicidio se la sancionará con una pena de 10 a 20 años de prisión”, se puede inferir la norma de obligación anteponiendo una negación a la conducta prohibida: si ésta es “cometer homicidio”, su negación será “NO cometer homicidio”, que es precisamente la conducta cuya observancia obligatoria se impone implícitamente por la misma norma.

En ocasiones, el derecho emite enunciados en los que declara que determinada conducta es obligatoria, sin que la contraria a dicha acción se encuentre ligada con una sanción. En estos casos es dudoso que el enunciado de referencia pueda ser propiamente calificado como norma obligatoria; sin embargo, éste es un problema controvertido que no corresponde atender aquí.

D. Normas jurídicas que imponen un “tener que”

Cuando realizamos acciones como solicitar nuestro pasaporte, asistir ante un notario público para protocolizar un contrato de compra-venta, etcétera, realizamos acciones o actividades que sería incorrecto calificar como obligatorias dado que la negación de la misma no constituye un hecho ilícito que de ser realizado active la imposición de una sanción. Nadie es sancionado por no solicitar un pasaporte o por no solicitar una licencia de construcción; si no lo hace, simplemente no podrá obtener el resultado condicionado a la realización de esas acciones, a saber, el pasaporte o la licencia.

La parte de la estructura normativa que refleja el carácter distintivo de estas normas, es la siguiente:

- Una acción normativa.

NUESTROS DERECHOS

- Un resultado consistente en un cambio en la situación jurídica del sujeto normativo.
- Una relación que implica que sí y solo sí es realizada la acción, entonces se obtendrá el resultado normativo.

Una manera de destacar la diferencia de estas normas respecto a las normas prohibitivas y las que imponen obligaciones consiste en suponer que las primeras son dirigidas al hombre potencialmente malo, para indicarle qué conductas debe evitar; en cambio, las de "tener que", se dirigen al buen hombre que lo único que quiere saber es de qué manera debe actuar para obtener las facilidades que el derecho le ofrece.



E. Normas permisivas

El término *permisión* tiene múltiples significados que analizaremos con más detalle al momento de abordar el significado de “derecho” en el sentido de “derecho subjetivo”. No obstante, de manera provisional puede entenderse que está permitida toda aquella acción que no está expresamente prohibida.

6. Las normas jurídicas como enunciados performativos

El carácter performativo de algunos enunciados es fundamental en la dinámica a través de la cual el derecho incide en la creación de situaciones jurídicas configurantes de nuestra realidad social. Por ejemplo, se encuentra presente cuando un juez emite el enunciado “condeno al señor ‘x’ a una pena de 20 años de prisión”, y al decirlo está condenando; o cuando un juez de lo civil en la ceremonia nupcial expresa: “Los declaro marido y mujer” y al decirlo está declarando que los antes novios se convierten en esposos.

La afortunabilidad o desafortunabilidad de este tipo de enunciados en la práctica jurídica juega un papel fundamental, pues de la satisfacción de sus condiciones o no, dependerá que ciertos cambios de estatus jurídico sean válidos (afortunados) o nulos (desafortunados).

Si por ejemplo un menor de edad se hace pasar por un adulto y celebra un contrato con otra persona, dicho contrato será nulo, pues una de las condiciones de afortuna-

NUESTROS DERECHOS

bilidad de dichos actos jurídicos exige que sean efectuados por sujetos capaces de contratar, situación que no satisfacen los menores de edad. Como se pone de relieve, el derecho establece las condiciones de afortunabilidad o desafortunabilidad de los actos jurídicos.

Además de esta función que tiene lugar en el uso del lenguaje jurídico en contextos prácticos,

la función performativa del lenguaje tiene lugar como parte de la estructura de ciertas normas que modifican, crean o suprimen otras normas de derecho. Un ejemplo típico son las llamadas normas derogatorias, por las cuales se suprime una norma del sistema jurídico.

Tal podría ser el caso de una norma que estableciera: “Se derogan los artículos 1o., 2o. y 4o. del Código Penal”, al decir “se derogan”, está derogando. Lo mismo sucede con otras que suprimen no una parte de una ley, sino una ley completa en cuyo caso se habla de abrogación. El ejemplo sería: “Se abroga la ley por la que se imponen diferentes impuestos, publicada el 30 de diciembre de 1998”. Al igual que en el caso de las anteriores, al decir “se abroga”, se está abrogando.

7. Normas definitorias

Las normas definitorias son aquellas que asignan el significado de ciertas expresiones en sentido técnico jurídico. Su característica diferencial con respecto a una definición no normativa es que el significado atribuido es el que hay

que usar para participar exitosamente en los procesos de comunicación de carácter jurídico.

Por ejemplo, independientemente de que en el lenguaje coloquial se defina “mayor de edad” como cualquier persona que haya cumplido 18 años, una norma jurídica podría definir “mayor de edad es toda persona que haya cumplido 16 años”. Las consecuencias de esta definición al interior del derecho estriba en que si una norma establece: “Los varones mayores de edad deberán prestar servicio militar”, la norma aplicaría para los varones que hayan cumplido 16 años y no sólo a partir de haber cumplido 18, como podría hacer pensar el significado de “mayor de edad” en el lenguaje coloquial.

La estructura de este tipo de normas es similar a la de cualquier definición:

- Una expresión a definir.
- Un significado atribuido a dicha expresión.

A diferencia de las normas obligatorias, carece de sentido decir que alguien que no empleara las expresiones con el sentido normativo se hace acreedor a una sanción, ya que la consecuencia (no prevista normativamente) estriba en una imposibilidad para comprender adecuadamente el mundo jurídico.

8. *Normas regulativas y normas constitutivas, hechos brutos e institucionales*

El término “normas regulativas” denota aquellas normas que reglamentan acciones preexistentes a la norma, mismas que quedan denotadas por el término “hechos brutos”.

NUESTROS DERECHOS

Por ejemplo, la conducta consistente en estacionar el automóvil podría existir sin necesidad de la existencia de una norma que expresamente la regulara.

El término “regla constitutiva” denota reglas que determinan las condiciones de pensabilidad de ciertas acciones, que en este caso son denominadas por “hechos institucionales”.

Las reglas del ajedrez constituyen un ejemplo típico de reglas constitutivas y el juego mismo de un hecho institucional.

Independientemente de su estructura, las normas jurídicas tienen un carácter constitutivo y la dinámica social derivada de las mismas constituye un hecho institucional, pues el carácter constitutivo de las normas jurídicas es la fuente de donde emerge el esquema de interpretación y patrón de comportamiento social a que hacíamos alusión al inicio de este apartado.

9. Normas primarias y secundarias

Antes de comenzar el desarrollo de este epígrafe, hagamos una breve recapitulación de lo expuesto en este apartado. Estamos analizando el significado de “derecho” desde el punto de vista normativista, para ello:

- Se analizaron los distintos tipos de enunciados lingüísticos.
- Se ubicaron a las normas en general como especie de enunciados fundamentalmente prescriptivos y se analizó su estructura.

- Se ubicaron a las normas jurídicas como especie de normas, se expuso su clasificación estructural y también se les clasificó en función de las categorías de enunciados que pueden adoptar.

Sin embargo, las características presentadas hasta el momento, aún no permiten diferenciar completamente a las normas jurídicas de otros tipo de normas. Para ello es necesario referir funciones de ciertas normas jurídicas que no se encuentran en ningún otro tipo de sistema normativo y no se refieren a las conductas entre sujetos normativos, sino de sujetos normativos respecto a las normas jurídicas mismas. Estas normas se conocen con el nombre de reglas secundarias, para distinguirlas de las que regulan la conducta entre sujetos normativos, a las cuales se les denomina reglas primarias.

Las normas secundarias son de tres tipos:

- Normas de reconocimiento. Sirven para identificar las normas que forman parte de un sistema jurídico concreto. Por ejemplo, la regla que dice “son normas del sistema jurídico mexicano todas las que sean producidas de conformidad con los procedimientos de creación normativa establecidos en la Constitución”.
- Normas de cambio. Facultan a ciertos funcionarios y a los particulares para que puedan crear, cambiar o suprimir las normas. Son de este tipo las que regulan el proceso de creación legislativa y permiten a los particulares crear normas individualizadas, como sucede al momento de celebrar un contrato.
- Normas de adjudicación. Facultan a determinados funcionarios (los jueces) a determinar los casos en que se ha infringido una norma primaria.

NUESTROS DERECHOS

Las normas secundarias permiten dar cuenta de alguna de las características básicas del derecho: tanto la creación de las normas generales como particulares son hechos institucionales.

Ejemplos típicos de estas instituciones en nuestro país son las cámaras de Diputados y Senadores y los tribunales, respectivamente.

Además de la propiedad diferencial de las normas jurídicas consistente en ser producto de hechos institucionales, su caracterización como jurídicas no puede ocurrir de modo aislado, sino como resultado de su pertenencia a un sistema complejo de normas que es el sistema jurídico. De él nos ocupamos a continuación.



IV. "DERECHO" EN SENTIDO DE "DERECHO OBJETIVO"

1. *El derecho: un "mecano" normativo*

Una forma sencilla de definir la palabra "sistema" consiste en decir que significa "un conjunto de elementos interrelacionados, entre los que existe una cierta cohesión y unidad de propósito".

De conformidad con esta definición, es posible pensar en muchas y muy diversas cosas que denotaríamos con esa palabra. Por ejemplo, el conjunto de piezas integrantes de una máquina; un conjunto de personas que participan cooperativamente en la realización de una tarea común; un conjunto de especies animales y vegetales que constituyen un entorno ecológico, etcétera.

También podemos usar el término "sistema" para referirnos a un conjunto de proposiciones lingüísticas contenidas en un texto, de cuya interacción de significados se obtiene el significado del texto en sí. Por ejemplo, el conjunto de asociaciones que evoca en nuestra mente el cuento de *Alicia en el País de las Maravillas* es el resultado de la incidencia de la totalidad de las proposiciones constitutivas del texto en nuestro cerebro (incluyendo su estructura en capítulos, apartados, etcétera).

Conforme a esto, un texto puede producir en nuestras mentes mundos posibles, o sea, mundos imaginarios que aunque no existan, y tal vez no puedan existir en el mundo "real", tienen sentido propio

No todos los textos generan mundos posibles ya que algunos constituyen modelos explicativos del funcionamiento del mundo real (explicaciones científicas) y otros

NUESTROS DERECHOS

son la base para que determinadas acciones e interacciones sociales puedan tener lugar. Por ejemplo, las instrucciones de un juego de mesa determinan un mundo convencionalmente creado que da lugar a esquemas mentales que son la base de las conductas que realizamos y el sentido que damos a nuestras jugadas y las de nuestros contrincantes.

Atendiendo a lo que indicamos en el apartado anterior, en uno de sus sentidos el término “derecho” se refiere a un sistema de proposiciones que se organizan en múltiples textos con significado unitario y que corresponden a los mundos o esquemas que son presupuestos para que cierto tipo de acciones e interacciones puedan ocurrir en el mundo real.

Algunos ejemplos de estos textos son: el Código Penal, el Código Civil, la Constitución Política Mexicana, etcétera. Otros son los contenidos en las tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, por la que se crea una norma general semejante a la producida por los legisladores. Otros textos son constitutivos de normas particulares, como es el caso de los contratos celebrados entre los particulares o las sentencias dictadas por los tribunales.

Como la definición indica, un sistema está integrado por elementos que se encuentran interrelacionados de modo coherente con una cierta unidad de propósito. En el caso del derecho, esta propiedad es válida no sólo al interior de un texto legal, sino incluso entre diversos textos legales. Así, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de

Títulos y Operaciones de Crédito, indican expresamente que cuando un caso no pueda ser resuelto aplicando sus normas, podrá serlo mediante la aplicación supletoria del Código de Comercio, el cual refiere en los mismos términos al Código Civil.

Las relaciones entre las proposiciones de textos jurídicos comprenden también a aquellas que crean normas individualizadas.

Por ejemplo, en los contratos se citan los artículos de la ley respectiva en los que facultan a contratar a los sujetos normativos que celebran dicho acto jurídico y las sentencias fundamentan sus argumentos en textos legales o jurisprudenciales.

En cierto sentido, el derecho es equiparable a un mecano constituido por ciertas estructuras (códigos, leyes, jurisprudencia, etcétera) de las que podemos tomar piezas prestadas para construir otras figuras, lo que implica que ciertas "piezas" son ensamblables entre sí y otras no (por ejemplo proposiciones contradictorias como una que establece que cierta conducta está prohibida y otra se refiere a la misma conducta como permitida).

Siguiendo esta analogía, es posible decir que la estructura de la norma como la expusimos en el apartado anterior, es equiparable a los modelos que indican las figuras que se pueden obtener si se ensamblan adecuadamente las piezas dispersas en los textos jurídicos.

NUESTROS DERECHOS

Por ejemplo, puede suceder que las piezas constitutivas de una norma prohibitiva dirigida a un tipo de servidor público se encuentren dispersas en diferentes leyes: en una ley orgánica podrían encontrarse la definición del sujeto normativo, la acción debida, las condiciones de activación normativa y las modalidades de cumplimiento; pero en otro texto legal, como podría ser la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la proposición en la que se establece la sanción prevista para los casos de incumplimiento de las conductas obligadas previstas en el primer texto legal.

Las normas armadas de esta manera, se interrelacionan en estructuras mayores. Por ejemplo, como se verá cuando abordemos el significado de “derecho” entendido como “derecho subjetivo”, alguna de las acepciones de la expresión implican la existencia de dos normas, cada una de las cuales puede ser el producto del ensamble de diversas piezas ubicadas en diversos textos legislativos: requiere una estructura normativa permisiva de cuyo sujeto normativo se podrá predicar que es titular de un derecho subjetivo, si existe otra estructura normativa de carácter obligatorio que imponga a otro sujeto normativo la conducta a cuya realización tiene derecho el sujeto normativo de la primera norma.

La característica del derecho como sistema normativo no es privativa de él, ya que también podemos encontrarla en otros ámbitos como el de los juegos o la religión. Por ejemplo, la Biblia constituye un sistema normativo que en

su conjunto genera esquemas que sirven como patrón de conducta social y cuyos textos tienen una estructura semejante a la de los textos jurídicos, pues su división en versículos, en algún sentido le proporciona una organización equiparable a la de los artículos de una ley.

Entender el derecho en el sentido que estamos apuntando es importante ya que permite comprender por qué saber leer puede no ser suficiente para comprender lo que establecen las leyes, los códigos, etcétera. Facilitar esa comprensión es, precisamente, la intención de la serie de cuadernos Nuestros Derechos.

Resolver el problema consistente en caracterizar los sistemas normativos también es importante para resolver uno de los problemas que dejamos pendiente en el apartado precedente, pues, como establecimos ahí, una norma jurídica se diferencia de otras normas por su pertenencia a un sistema jurídico.

Dicho de otra manera, no caracterizamos a un sistema jurídico por estar integrado por normas jurídicas, sino a una norma jurídica por su pertenencia a un sistema jurídico.

Una vez establecidas las características definitorias de “sistema jurídico” determinaremos la manera de individualizar a un sistema jurídico de otros; de ahí pasaremos a exponer el criterio que nos permite determinar que una norma jurídica pertenece a un sistema específico y concluiremos analizando en qué condiciones se puede decir que un sistema jurídico existe.

NUESTROS DERECHOS

2. Definición de “sistema jurídico”

Decimos que estamos ante un sistema normativo cuando se satisfacen las siguientes condiciones:

- Existe un sistema de normas de conducta (resultantes de la función “mecano” de las proposiciones que constituyen los textos normativos) que permiten, prohíben, obligan o establecen como “un tener que” ciertas acciones, para determinados sujetos normativos y que habrán de ser realizadas bajo ciertas modalidades, en caso de satisfacerse sus condiciones de activación normativa.
- Entre las normas de conducta del sistema, existen algunas que facultan a ciertos sujetos normativos para la creación, modificación o supresión de las normas generales del sistema (normas de cambio).
- Entre las normas de conducta del sistema, existen algunas que facultan a determinados sujetos normativos a resolver controversias jurídicas (normas de adjudicación), mediante la aplicación de las normas generadas por los sujetos normativos aludidos en el inciso “B” y a activar la fuerza estatal para aplicar las sanciones previstas en el sistema.

De lo establecido en el párrafo anterior no se puede seguir que los criterios para resolver los conflictos con base en las normas de adjudicación del sistema, se agoten en las que son producidas por los órganos centralizados referidos en el inciso “B”, pues en sus resoluciones los jueces suelen y pueden recurrir a principios morales para fundamentarlas. Estos principios, que no forman parte del sistema jurídico, en cambio sí participan de las herramientas no normativas a las que recurren los jueces para resol-

ver algunas controversias entre las que también se encuentran: el uso de las reglas de interpretación del derecho propias del gremio de los juristas, el análisis de las ambigüedades, vaguedades, etcétera, de los textos jurídicos, recurrir a lo que dicen los “teóricos” del derecho (de los que hablaremos más adelante), etcétera.

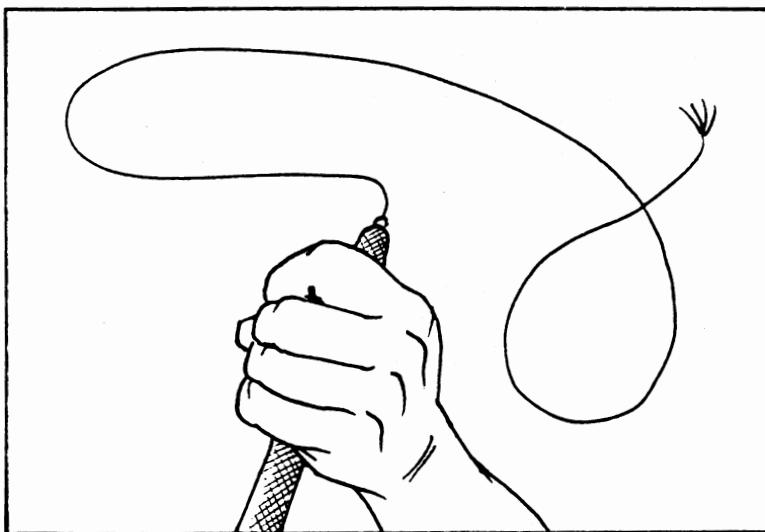
Una característica diferencial sumamente importante en la definición de “sistema jurídico” es que, en su conjunto, el sistema de enunciados determina en qué condiciones está prohibido o permitido el uso de la fuerza y confiere el monopolio de la fuerza pública a órganos centralizados creados por el mismo, con el objeto de hacer efectivas las sanciones que sus normas prohibitivas establecen.

El peso de esta característica del derecho es tan fuerte, que muchos la han llegado a considerar la única propiedad diferencial de los sistemas jurídicos respecto a otros sistemas normativos. Una muestra de que esta característica por sí sola es poco útil como criterio de identificación de los sistemas normativos, está en que muchos sistemas religiosos también han llegado a consagrar el uso de la fuerza física. Por ejemplo, en el Corán encontramos lo siguiente: “En cuanto al ladrón y a la ladrona, les cortaréis las manos como retribución a la obra de sus manos; como castigo proveniente de Dios; Dios es todopoderoso y prudente” (Sudra V, 42).

Y en otro lugar, dice:

Aplicaréis al hombre o a la mujer adúlteros cien latigazos a cada uno. Que la compasión no os contenga en el cumpli-

NUESTROS DERECHOS



miento de este precepto de Dios, si creéis en Dios y en el final. Que el suplicio tenga lugar en presencia de un cierto número de creyentes (Sudra XXIV, 2).

3. *Criterio de identidad de los sistemas jurídicos concretos*

Como podrá suponer nuestro lector, todos los sistemas jurídicos del mundo satisfacen las condiciones definitorias referidas en el epígrafe anterior: tanto el francés, como el alemán, el inglés, el mexicano, etcétera; la pregunta que se impone consecuentemente es: ¿cómo puedo diferenciar un sistema jurídico de otro si todos poseen las mismas propiedades?

La respuesta parece sencilla: encontrando una propiedad diferencial en cada uno de ellos. Sin embargo, las cosas no son tan simples como parece, ya que es neces-

rio encontrar un criterio diferencial y no diferencias ocasionales, atendiendo al contenido proposicional de cada uno. Ello obedece a que

las proposiciones de un mismo sistema jurídico suelen ser modificadas sin que la identidad del mismo se pierda; algo como lo que sucede con nuestra identidad personal que sigue siendo la misma a pesar de la constante renovación de nuestras células.

Otro criterio engañoso consiste en suponer que un sistema se puede distinguir de otro por el territorio geográfico en el cual está vigente. Sin embargo, éste presenta problemas técnicos ya que el territorio de un país es el resultado de definiciones normativas, o sea que presupone la acción constitutiva del derecho.

Un criterio adecuado consiste en sostener que podemos identificar un sistema normativo concreto (el mexicano, por ejemplo) de otro extranjero cuando la dinámica de los sujetos normativos que da vida a un sistema jurídico hace suponer que existe consenso en reconocer una norma de cuya obediencia depende la generación y aplicación del sistema en cuestión.

Por ejemplo,

la norma que establece: son normas del sistema jurídico mexicano, todas aquellas que sean promulgadas de conformidad con los procedimientos de creación normativa derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

NUESTROS DERECHOS

Debe subrayarse que la norma de reconocimiento no es una Constitución Política mexicana determinada, sino cualquiera que en un momento histórico dado sea considerada la Constitución vigente.

Sólo así es posible explicar por qué solemos referirnos al derecho mexicano como una unidad, independientemente de las reformas que ha sufrido la Constitución a lo largo del tiempo, e incluso, de los cambios de Constituciones a lo largo de la historia.

Una vez expuestas las definiciones de “sistema normativo” y “norma de reconocimiento” es posible hablar del criterio conforme al cual podemos determinar si una norma jurídica pertenece o no a un sistema jurídico específico.

4. El criterio de pertenencia de una norma a un sistema jurídico: árboles genealógicos y cadenas de validez

Supongamos que alguien pregunta: ¿por qué los apellidos de Enrique son Cáceres Nieto?, la respuesta sería: porque es hijo de Enrique Cáceres Méndez e Irma Aída Nieto Lozano; y si después preguntara: ¿por qué su padre se apellida Cáceres Méndez?, la respuesta sería: porque es hijo de Enrique Cáceres Vaqueiro y de René Marcela Méndez de Cáceres, y así sucesivamente.

De la misma manera que en un árbol genealógico se da un efecto de cascada que determina los apellidos de alguien en función de los apellidos de los padres, así como su pertenencia a una determinada familia,

decimos que una norma pertenece a un sistema jurídico específico cuando ha sido emitida por un sujeto normativo facultado para ello por otra norma anterior, la que a su vez ha sido emitida por otro sujeto normativo facultado por otra norma anterior y así sucesivamente, hasta llegar a la Constitución y, en última instancia, a la norma de reconocimiento.

Cuando una norma pertenece a un sistema jurídico decimos que es válida, esto es, una norma jurídica es válida, cuando ha sido emitida por órganos facultados para hacerlo de conformidad con una norma de jerarquía superior. Conforme con esto, si alguien preguntara ¿por qué la sentencia (que es una norma individualizada) dictada por el juez, mediante la cual condena al señor Miguel Sánchez a pagar daños y perjuicios al señor Roberto Casas por incumplimiento de contrato?

La respuesta sería: porque la emitió de conformidad con las normas que lo facultan para ejercer la función jurisdiccional; si después preguntara: ¿por qué el señor Ramírez tiene derecho a que el señor Casas le pague, la respuesta sería: porque ambos celebraron un contrato jurídico válido por el que éste contrae una deuda con aquél; y si preguntara ¿por qué el contrato (que también es una norma jurídica individualizada) es válido?, la respuesta sería: porque fue elaborado de conformidad con las normas establecidas en el Código Civil, y si aun nos preguntara por qué es válido el conjunto de normas generales que integran el Código Civil?, la respuesta sería: porque ha sido creado de conformidad con las normas que regulan el proceso

NUESTROS DERECHOS

legislativo en la Constitución mexicana, cuyas normas hay que obedecer.

5. *La existencia de los sistemas jurídicos*

A. De juegos e iluminados

¿Qué pasaría si inventáramos un juego, definiéramos sus reglas, pero resulta ser tan poco exitoso que jamás nadie lo juega? ¿diríamos que el juego existe?

Algún iluminado nos podría dar la típica respuesta: “mh mh... ¡Sí, y No!”, causando nuestro desconcierto inicial. Sin embargo, como somos muy curiosos y emprendedores, veamos qué podría haber detrás de tal contestación, usando nuestra muy recurrida herramienta de análisis lingüístico: la ambigüedad.

El “Sí” de la respuesta de nuestro hipotético amigo adquiere sentido si asumimos que el término “juego” está afectado de ambigüedad y que está presuponiendo una acepción según la cual significa: el conjunto de las reglas necesarias para poder jugarlo. Otro contexto en el que podríamos encontrar esta expresión sería: “¡Pásame el juego nuevo!, dirigido por parte de un estibador a otro de los que trabajan en un almacén en el que por primera vez se está poniendo el juego a la venta por primera ocasión. En este caso, el significado de “juego” no está suponiendo la condición de que haya sido efectivamente jugado.

El “No” de la respuesta, presupone otro significado de “juego” conforme al cuál el uso de la expresión presupone que efectivamente hayan tenido lugar acciones resultantes del seguimiento de las reglas. Un contexto en el que esta expresión sería utilizada podría ser: “No hubo juego” refiriéndose al hecho de que un partido (por ejemplo de tenis)

fue suspendido, en cuyo caso no se refiere a las reglas, sino a las acciones.

De los dos significados diferentes que puede asumir “juego” depende lo que se quiera decir con “existe un juego”. Si se considera “juego” en el sentido de reglas, preguntar ¿existe el juego?, en nuestro ejemplo da lugar a un sí, dado que hemos generado las reglas. Pero si consideramos el segundo sentido de “juego” la respuesta será “no”, dado que no ha tenido lugar acción alguna con base en esas reglas. ¡He ahí la respuesta al aparentemente autocontradictorio Sí y No de nuestro “iluminado” amigo!

B. *“Derecho” como acción (un sentido no atendido)*

De manera semejante a lo que sucede con “juego”,

podemos decir que la pregunta ¿el derecho “x” existe?, puede referirse a dos cosas distintas:
— a la existencia del sistema de proposiciones lingüísticas que configuran un sistema jurídico; o,
— a las acciones que efectivamente tienen lugar en la realidad social con base en lo establecido por las normas referidas en el sentido previo.

De alguna manera, el hecho de que el sistema proposicional exista implica que las conductas establecidas por las normas han sido observadas en cierto grado, pues significa que se han respetado los procesos de creación normativa establecidos por ellas. Sin embargo, este grado no parece ser suficiente para decir que el derecho existe como sistema de conductas sociales en general.

NUESTROS DERECHOS

La respuesta a la pregunta consistente en determinar si un sistema jurídico existe o no entendido como dinámica social correspondiente a las normas, no es sencillo. Entre las respuestas que se han intentado para resolverlo se encuentra la consistente en sostener que

un sistema jurídico existe si sus normas tienen un mínimo de eficacia, lo que equivale a decir, son mínimamente respetadas. Sin embargo, con esta respuesta, el problema en vez de resolverse se desplaza al de la definición de lo que se debe entender por “mínimo” de eficacia.

No es este el lugar para analizar detenidamente el problema, sin embargo, puede resultar esclarecedor compararlo con el que significaría tratar de determinar en qué condiciones diríamos que se está ejecutando fielmente una partitura musical, atendiendo a los diferentes estilos de los ejecutantes. Como sucede con la determinación de la existencia de los sistemas jurídicos considerados como acciones sociales correspondientes a las normas no es posible pensar criterios en términos de todo o nada, sino más bien en cierto grado de aproximación a lo que sería una ejecución o cumplimiento ideal y una completa falta de correspondencia entre partitura e interpretación, o entre normas jurídicas y conducta social.

En un sistema jurídico concreto podemos encontrar partes del sistema normativo con un bajo índice de existencia social derivado de la institucionalización de conductas paralelas, no contempladas en el sistema normativo.

Lo dicho sucede, por ejemplo, cuando un funcionario público extiende una calcomanía de verificación ambiental a cambio de una gratificación, o cuando un agente de tránsito exige una mordida para no levantar una multa imaginaria.

En supuestos como éste podría pensarse que el hecho de que una parte del sistema normativo no sea existente puede implicar que otra parte del mismo automáticamente cobre existencia. Por ejemplo, que el hecho de solicitar gratificación a cambio de borrar multas inventadas de una computadora, activa automáticamente otra parte del sistema que es la que regula el delito de cohecho. Sin embargo, puede acontecer que tampoco esta parte del sistema sea completamente existente, como sucede si la posibilidad de que un funcionario responsable de cohecho sea sancionado o no, depende de factores extrajurídicos como puede ser el peso de las relaciones disponibles en el mundo político o la riqueza personal.

Al hecho de que de modo sistemático no haya correspondencia entre la existencia del derecho como sistema de normas y la existencia del derecho como conducta social institucionalizada, se le conoce con el nombre de anomia y constituye un síntoma importante de falta de un alto grado de eficacia de la parte del sistema jurídico afectado por ella.

NUESTROS DERECHOS

El grado de ineficacia de una parte del sistema completo, puede ser menor si se focaliza otro conjunto de normas. Por ejemplo, si desplazamos nuestra atención al derecho fiscal y detectamos que los índices de evasión fiscal son relativamente bajos.

Puede también acontecer que otras normas del sistema tengan un importante grado de correspondencia en la dinámica social, como podría ser el caso de la legislación encargada de regular lo relativo a la seguridad social.

Como puede verse, responder a la pregunta por la que se cuestiona

si un sistema jurídico existe o no, entendiendo el término "derecho" en el sentido de conducta social correspondiente a lo denotado por "derecho" en el sentido de sistema normativo, requiere la determinación de qué entenderíamos por un mínimo de eficacia y afrontar problemas derivados de la medición de los mismos en la realidad social considerando la totalidad del sistema normativo.

Estas respuestas constituyen parte del ámbito de estudio de una disciplina denominada sociología jurídica, que desafortunadamente no ha podido ser implantada aún en nuestro país (afortunadamente la introducción de esta disciplina comienza a ser seriamente considerada gracias a los esfuerzos de los doctores Hector Fix-Fierro y Sergio López Ayllón, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

Para finalizar este apartado, una pequeña pregunta a nuestro amable lector: considerando lo dicho hasta aquí, sus propias percepciones y el papel que el derecho juega

en cualquier día en su vida, ¿usted diría que el derecho mexicano tiene un grado de eficacia suficiente como para decir que existe?

6. *Las fuentes del derecho*

Las normas de cambio (las que conceden facultades para crear normas jurídicas) y las de adjudicación (las que facultan a resolver controversias jurídicas) se encuentran en la base de los procesos de creación normativa por parte de las instituciones que el propio derecho crea.

Tanto a los procesos de creación normativa como a sus productos, se les denomina con la expresión “fuente del derecho”.

En nuestro sistema jurídico son fuentes de derecho los procesos para la creación de la legislación, la jurisprudencia y las normas individualizadas (contratos y sentencias), así como las leyes, tesis jurisprudenciales, contratos y sentencias en sí.

Para algunos autores hay otro tipo de fuente del derecho: la costumbre; sin embargo, dado que su admisión en el sistema jurídico depende de su reconocimiento por los jueces queda resumida a las reglas de adjudicación.

NUESTROS DERECHOS

Una última acepción de “fuente del derecho” denota a los hechos sociales que dan lugar a la regulación normativa. Se les denomina con “fuentes reales del derecho” para distinguirlos de las fuentes anteriormente expuestas, a las que se suele englobar bajo la expresión “fuentes formales del derecho”.

La importancia de las fuentes formales puede variar en cada sistema jurídico. En el sistema jurídico mexicano, la legislación es predominante y las instituciones que la generan son tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. En un sistema como el de Estados Unidos, la legislación tiene una importancia menor en comparación con el generado por los tribunales.

El hecho de que México sea una federación, determina las facultades para legislar en determinadas materias.

La Federación tiene facultades para legislar en materias como: crédito público, hidrocarburos, energía eléctrica, etcétera.

En principio, lo que no es facultad exclusiva de la Federación se encuentra reservado para los estados y los municipios, pueden expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y otras disposiciones vinculadas con el ámbito de su jurisdicción.

Dentro de los sectores más importantes de la legislación mexicana se encuentran: las reformas constitucionales, reguladas por un procedimiento especial y más complejo que el que es seguido para la reforma de las leyes; las leyes, que son textos normativos de carácter general acerca de algún sector de la realidad social, como puede ser, el derecho del trabajo, la legislación fiscal, la legislación

mercantil, etcétera; los contratos-ley, que son celebrados entre uno o varios sindicatos de patronos y uno o varios sindicatos de patronos para establecer las condiciones que habrán de regir las relaciones laborales en una rama de la industria o en una o varias zonas económicas; convenios entre la Federación y los estados a efectos de coordinación, etcétera.

Además de la función legislativa del Poder Legislativo (Congreso de la Unión, Cámaras de Diputados, Senadores, etcétera), también el Poder Ejecutivo puede emitir textos normativos de carácter general y abstracto, en algunos supuestos como son: para reglamentar o detallar las disposiciones legislativas que rigen al Poder Ejecutivo, celebrar tratados internacionales con la ratificación del Senado, expedir decretos en materia de su competencia, etcétera.

La segunda fuente de derecho en importancia dentro del sistema jurídico mexicano es la jurisprudencia, que puede ser generada fundamentalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados. La jurisprudencia es obligatoria sólo para los tribunales.

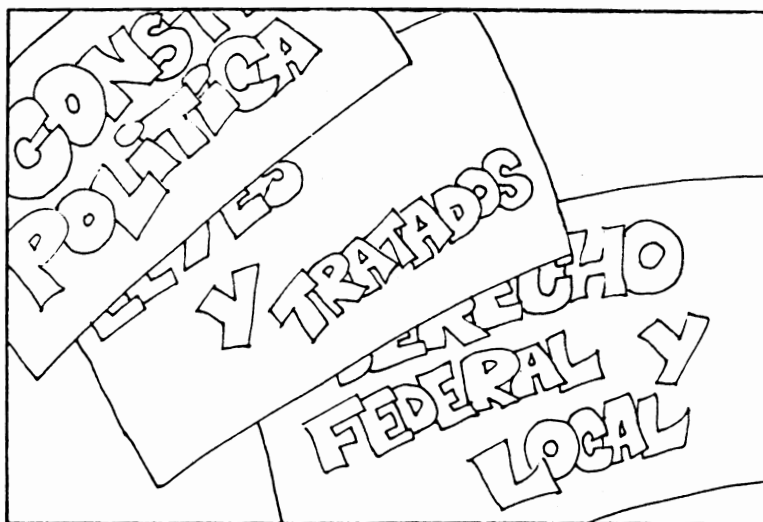
Por último, también se consideran fuentes de derecho, las normas jurídicas individualizadas como los contratos y las sentencias celebrados entre particulares o particulares y el Estado, con base en las normas potestativas que confieren facultades para ello, así como las sentencias emitidas por jueces competentes, por las que determinan situaciones jurídicas o imponen obligaciones concretas.

NUESTROS DERECHOS

7. La estructura jerárquica de las leyes

Así como la institucionalidad del derecho (propiedad diferencial de los sistemas jurídicos) da lugar a las fuentes del derecho de nuestro país, las cadenas de validez por las que se determina la pertenencia de una norma a un sistema jurídico, aterrizadas en nuestro derecho, son la base de la estructura jerárquica de diversos textos normativos, en los siguientes términos:

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Leyes constitucionales y tratados.
- Derecho federal y derecho local (cada estado de la República tiene su propia constitución local, así como sus instituciones de creación normativa).



Esta estructura determina importantes consecuencias para la coherencia y funcionalidad del sistema. Por ejemplo, con base en ella se resuelven algunas contradicciones entre normas de diferentes leyes, siguiendo el criterio de dar prioridad a las de mayor jerarquía sobre las de menor.

8. *La definición de “derecho” en sentido de “derecho objetivo” a partir del significado de “sistema jurídico”*

Probablemente el lector se haya preguntado: ¿por qué si el nombre del rubro de este apartado se refiere al significado de “derecho” en el sentido de “derecho objetivo” se ha estado hablando básicamente de “sistema jurídico”?

La razón es que ambas expresiones pueden considerarse sinónimas, en el siguiente sentido:

La expresión “derecho” en el sentido que nos ocupa significa: sistema jurídico que satisface el mínimo de eficacia para ser considerado existente.

9. *Derecho estatal, derecho internacional y derecho primitivo*

Uno de los problemas que trae aparejada la definición de “derecho” como sistema jurídico existente, es que genera dudas acerca de si con ese significado se puede hacer alusión a lo que normalmente se llama derecho internacional, o sea, el que rige las relaciones entre diversos Estados y al derecho primitivo que surge de los procesos naturales de interacción en una comunidad dada.

Para resolver la cuestión, es necesario introducir una nueva herramienta de análisis lingüístico: la vaguedad.

NUESTROS DERECHOS

A. *La vaguedad del lenguaje*

Decimos que una expresión está afectada de vaguedad, cuando no existe un conjunto identificado de propiedades definitorias que nos permita determinar con exactitud en qué condiciones podemos referirnos con ella correctamente a algo del mundo y en qué casos no. Por ejemplo, la palabra “calvo” está afectada de vaguedad: sin duda alguna la usaríamos para referirnos (denotar) a Kojak, el famoso detective televisivo de cabeza como bola de billar, pero sin duda no la usaríamos para referirnos a Bob Marley, el pionero músico rastafari; sin embargo, entre ambos polos de certeza se encuentra un espectro de penumbra en el que se ubican distintos niveles de calvicie. Es en esa zona donde la vaguedad aparece plenamente: ¿a partir de qué número de cabellos diríamos que alguien es calvo?, de hecho ¿existe consenso siempre que decimos que alguien lo está? ¿dónde termina el “se está empezando a quedar calvo” y comienza el “se está quedando calvo” y se pasa al “está calvo”?

Hay varios tipos de vaguedad, sin embargo, para lo que aquí interesa es útil referir la llamada “vaguedad por requisito del *quórum*”, que es aquella en la que no es fácil determinar cuándo aplicar o no la palabra a algo, debido a que no sabemos cuáles son las diferentes propiedades que deben estar presentes en el objeto para denotarlo con la expresión. Por ejemplo, ¿cuál sería el conjunto de características que debería satisfacer una chica para ser denotada por la palabra “bella”? ¿serían: tener ojos verdes o azules, tener una altura de más de 1.70, que sus medidas fueran 90-60-90? ¿y si satisficiera todas esas condiciones, pero sus ojos fueran de color miel, ya no podríamos decir que es bella? ¿y si tuviera ojos azules, pero midiera 1.68?,

etcétera. Como se puede ver, la falta de propiedades cerradas y fijas es la causa de este tipo de vaguedad.

La vaguedad por requisito de quórum, se distingue de otro tipo de vaguedad llamada por requisito del quantum, que estriba ya no en la falta de un conjunto cerrado de propiedades, sino en la falta de determinación de la intensidad con que una sola propiedad debe estar presente.

Términos como “rápido” o “alto” presentan este tipo de vaguedad: ¿a partir de qué velocidad diríamos que un auto es rápido? ¿a partir de cuántos centímetros diríamos que una persona es alta o que un globo aerostático está volando muy alto?

B. La vaguedad de “derecho” y los derechos internacional y primitivo

En algún sentido, es posible decir que el término “derecho” en el sentido de “derecho objetivo” es bastante preciso para identificar el derecho de un Estado (es decir que el derecho estatal se encuentra en uno de los polos de certeza), a diferencia de fenómenos como los denominados con “derecho internacional” o “derecho primitivo”, mismos que incurren en el espectro de vaguedad de la expresión por requisito del quórum.

La razón es que, el derecho internacional no posee instituciones que centralicen la producción legislativa propia de los derechos estatales, al ser producido fundamentalmente sobre la base de normas consuetudinarias y de tratados o convenios celebrados entre los Estados, ni tampoco satisfac-

NUESTROS DERECHOS

ce la condición de contar con el monopolio de órganos encargados de la aplicación de la fuerza física contra otros Estados en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

Algo semejante ocurre con el llamado derecho primitivo, el cual está constituido únicamente por normas primarias que establecen derechos, obligaciones y prevén sanciones, pero, a falta de normas secundarias, no cuentan con instituciones que centralicen las funciones de producción normativa, ni decisión de controversias.

Afortunadamente, como hemos aprendido a escapar de las garras del esencialismo, no tenemos que decidir si ambos derechos “son realmente o no derecho”. Nuestra respuesta sería, simplemente, que dentro del espectro de penumbra de la vaguedad de la expresión, se encuentran mucho más cerca del polo de certeza afirmativo que del negativo, es decir de aquellos casos en los que sin duda alguna aplicaríamos la expresión “derecho” en el sentido de “derecho objetivo”.

10. *Relevancia de la definición de “derecho” en el sentido de “derecho objetivo” en la colección de cuadernillos Nuestros Derechos*

Como indicamos en otra parte,

la acepción de derecho que abordamos en este apartado es la que corresponde a nuestras asociaciones inmediatas acerca del derecho y que implica entidades como leyes, códigos, diputados, tribunales, juicios, etcétera.

Pues bien, es también el significado presupuesto en la identificación de la totalidad de los textos jurídicos acerca del cual versarán el resto de los cuadernillos de la colección *Nuestros Derechos, los cuales abordarán de manera temática la regulación jurídica de ciertos sectores del derecho, atendiendo primordialmente a clases de sujetos normativos determinados en función del tipo de actividad que realizan*.

Por otra parte, esta misma acepción es presupuesta por otros dos significados de “derecho” que también se encuentran en el núcleo de nuestras asociaciones al mundo de lo jurídico, cuya exposición es parte medular de los objetivos de la colección y cuya comprensión es condición para poder ejercitar y/o comprender nuestros derechos. De estos otros significados nos ocuparemos a continuación.

V. “DERECHO” EN SENTIDO DE “DERECHO SUBJETIVO”

1. *Los derechos de los sujetos*

En ocasiones el término “derecho” no se usa para aludir a un sistema jurídico (derecho mexicano, derecho argentino, etcétera), esto quiere decir que no se emplea en sentido de derecho objetivo, sino para referir cierta situación en la que se encuentra un sujeto específico.

Algunas frases típicas en que la expresión “derecho” es usada en este sentido, son: “Alfredo tiene derecho a que Claudia le diga abiertamente que no lo ama”; “Habiendo sido tan buen hombre, Elías se ha ganado el derecho de ir al cielo”; “Conforme a lo que establece la Constitución, yo tengo derecho a manifestar libremente mis ideas”.

NUESTROS DERECHOS

No en todas estas frases “derecho” ha sido empleada como equivalente a “derecho subjetivo”; únicamente en la última, como cuando la situación del sujeto a quien se atribuye el derecho no es determinada por referencia a un sistema moral o religioso, sino a un derecho objetivo.

Con esto tenemos identificada una primera y muy importante característica de los derechos subjetivos: jurídicamente hablando, podemos predicar de alguien (sujeto normativo) que tiene un derecho (subjetivo) si y sólo si una norma de un sistema jurídico (derecho objetivo) se lo concede.

Por otra parte, cabe señalar que “derecho” en el sentido del que nos estamos ocupando en este apartado, está afectada de ambigüedad técnica, ya que posee varios significados, no obstante que en todos está presente como núcleo de significado la característica referida en el párrafo anterior. A continuación procederemos a analizar sus distintas acepciones, pero antes es necesario decir algo acerca del derecho subjetivo como parte de los conceptos jurídicos fundamentales.

2. Conceptos jurídicos fundamentales

Como se ha dicho en otra parte de este trabajo,

el derecho, al igual que muchas otras disciplinas, cuenta con un lenguaje técnico especializado, con diferentes grados de generalidad.

LENGUAJE Y DERECHO



Por ejemplo, “delito”, “homicidio”, “pena”, etcétera, son palabras características de un área del derecho que se conoce con el nombre de “derecho penal”, mientras que “arrendamiento”, “donación”, “testamento”, forman parte del léxico del derecho civil, y “contribuyente”, “impuesto”, “tasa gravable”, lo son del derecho fiscal. Sin embargo, hay determinadas expresiones que constituyen el sustrato conceptual común a todo derecho, independientemente de las disciplinas de especialización o de cualquier derecho objetivo en particular.

El derecho subjetivo es uno de esos conceptos y su cabal comprensión se obtiene más fácilmente si se le expone, aunque sea someramente, en relación con los demás conceptos jurídicos fundamentales.

NUESTROS DERECHOS

A. Sanción

Constituye un acto de fuerza por el que el Estado castiga a un sujeto que ha realizado una conducta prevista como ilícita en una norma jurídica.

Debe aclararse que no todo acto de ejecución forzosa del Estado constituye una sanción, como acontece en el caso en que se determina la reclusión de una persona en un hospital psiquiátrico para su tratamiento. En este supuesto, nadie en su sano juicio estaría dispuesto a sostener que verse privado de sus facultades mentales constituye un hecho ilícito y por tanto tampoco sería correcto llamar al acto de ejecución una sanción.

A pesar de que normalmente asociamos la idea de sanción a la pena del derecho penal, las sanciones no únicamente tienen lugar en esa rama del derecho; también la ejecución de los bienes resultante de un embargo constituye una sanción, sólo que en este caso corresponde al ámbito del derecho civil; de igual manera puede hablarse de sanciones en otros ámbitos como el administrativo, el fiscal, etcétera.

Como la sanción es un concepto jurídico y no psicológico, el hecho de que el sujeto efectivamente sufra o no con su imposición, o el grado en que lo haga es irrelevante para decir que se le ha sancionado.

B. *Acto antijurídico*

Es la conducta que al ser realizada por un sujeto normativo hace que deba ser sancionado de conformidad con lo establecido por una norma jurídica. También se le conoce como conducta prohibida.

Debe recordarse que en el léxico jurídico, el término “acción” no sólo puede denotar conductas “positivas” como pagar, sino también conductas omisivas como “no prestar el auxilio debido”, y que también puede significar actividades o procesos constituidos por varias acciones o conductas, digamos, integrar una averiguación previa.

C. *Obligación*

Decimos que una conducta es obligatoria cuando es la conducta opuesta a la conducta prohibida o hecho ilícito.

Por ejemplo, si la conducta prohibida es “robar”, la conducta obligatoria es “no robar”; si la conducta prohibida es “privar de la vida a otro”, la conducta obligada correspondiente será “no privar de la vida a otro”, etcétera.

NUESTROS DERECHOS

D. *Persona jurídica*

En el lenguaje técnico del derecho, el término “persona” no significa lo mismo que en el lenguaje coloquial, o sea, una especie biológica. Jurídicamente, la palabra “persona” denota a todo centro de imputación de derechos y obligaciones normativamente determinado.

La diferencia fundamental con el sentido coloquial es que en el ámbito jurídico se suele usar la palabra “persona” para referirse a ciertas entidades como las empresas, los organismos públicos e incluso el Estado, cuya identidad y funcionamiento es independiente de los individuos que los configuran. Por ejemplo, en cierto tipo de sociedades mercantiles, la responsabilidad patrimonial de los socios se limita a las aportaciones hechas a la sociedad y no se puede afectar su patrimonio personal; de igual forma, una sociedad sigue conservando su identidad jurídica aun cuando ya no formen parte de la misma ninguno de los socios fundadores.

Para distinguir ambos tipos de personas, se suele hablar de personas físicas (las que corresponden a individuos) y personas morales (para referirse a las colectividades).



E. Responsabilidad

A diferencia de lo que acontece en el lenguaje común,

en el derecho una persona puede ser responsable y por tanto ser objeto de una consecuencia normativa aunque no haya realizado directamente la conducta cuya realización desencadena la consecuencia.

Por ejemplo, la responsabilidad de los padres por las conductas realizadas por sus hijos o la de un fiador como consecuencia de la insolvencia del sujeto cuya deuda tuvo a bien garantizar.

NUESTROS DERECHOS

Para distinguir los casos en que la consecuencia normativa se aplica a quien realiza la conducta ilícita, se reserva el uso de “responsabilidad directa” y para casos como el del fiador “responsabilidad indirecta”.

F. Capacidad y competencia

¿Recuerda el cuento de Caperucita Roja? Suponiendo que se pone en escena una versión del mismo en un teatro infantil, queda claro que el guión determinará que ciertas frases u oraciones habrán de ser emitidas necesariamente por determinado personaje y otras por otro. Por ejemplo, preguntar: “¡Abuelita, qué ojos tan grandes tienes!” Corresponderá ser emitido por quien esté interpretando al personaje de Caperucita Roja, y decir “Son para verte mejor”, al lobo feroz. Dicho de otra manera, según el guión de la obra, si alguien ha de decir “¡Abuelita, que ojos tan grandes tienes!” habrá de ser Caperucita y no algún otro personaje, de la misma forma que si alguien ha de decir “Son para verte mejor” habrá de ser el lobo feroz y no, por ejemplo, el leñador.

Análogamente,

las normas jurídicas establecen una relación necesaria entre las conductas normativas y los sujetos normativos que habrán de realizarlas. Por ejemplo, si alguien ha de dictar una sentencia será un juez y no un notario; si alguien ha de perseguir los delitos será el Ministerio Público y no un contribuyente, etcétera.

Los términos “capacidad” y “competencia” denotan la conexión existente entre un sujeto normativo y el resto de los elementos normativos (acción, modalidades de cumplimiento, etcétera).

Así como en el cuento de Caperucita lo que podría hacer cierto personaje era emitir cierta parte del diálogo, en el caso del derecho, un sujeto es capaz o competente para producir cambios en situaciones jurídicas cuando una norma jurídica así lo establece. El término “capacidad” alude a los cambios de estados jurídicos del sujeto normativo mismo, como sucede en el caso de la celebración de un contrato, en tanto que “competencia” se refiere a las modificaciones que un sujeto normativo puede realizar sobre la situación jurídica de otro. Por ejemplo, un juez es competente para cambiar el estado jurídico de alguien a través de una sentencia por la que lo declara culpable de haber cometido un delito, o un juez civil es competente para modificar la situación jurídica de dos sujetos normativos al momento de declararlos marido y mujer.

Cuando un sujeto normativo lleva a cabo un acto jurídico para el cual no tiene capacidad o no es competente, dicho acto es nulo, lo que equivale a decir que no produce el cambio jurídico pretendido. En términos de performatividad, diríamos que no fue afortunado.

G. “Derecho” (subjetivo)

Como dijimos anteriormente, la palabra “derecho” en el sentido de derecho subjetivo tiene varios significados que tienen en común la propiedad de determinar la situación jurídica de un sujeto normativo por referencia a un derecho positivo. Las diversas acepciones del término son las siguientes:

NUESTROS DERECHOS

a) "Derecho" como contrario de prohibición

En algunos contextos, decir que alguien tiene derecho a realizar cierta conducta significa simplemente que no existe ninguna norma que se lo prohíba.

En este sentido y dado que las conductas obligatorias no están prohibidas, es correcto decir que por definición, también están permitidas.

En otras ocasiones, decir que un sujeto normativo tiene derecho significa que ni la conducta expresada por la norma ni su contraria están prohibidas.

Por ejemplo, decir que tengo derecho a transitar por avenida Reforma, significa que puedo decidir hacerlo sin que nadie me sancione por ello, pero que también puedo decidir no hacerlo sin que tampoco se me pueda sancionar por esta decisión.

b) "Derecho" como autorización

En ciertos contextos, decir que un sujeto normativo tiene un derecho significa que ha sido expresamente autorizado para llevar a cabo una conducta que de no haber sido por ese facultamiento expreso, no podría realizar.

Lo anterior acontece, por ejemplo, cuando se efectúa una delegación de funciones en algún funcionario de jerarquía inferior por parte de su superior.

c) “Derecho” como correlato de una obligación

A veces decir que un sujeto tiene derecho significa que existe otra norma jurídica por la que se impone a otro sujeto la obligación de realizar determinada conducta a cuya realización precisamente es a la que el primero tiene derecho.

Dado que en derecho las acciones pueden ser activas u omisivas, es válido decir que se tiene derecho a que otro haga o deje de hacer algo, según sea el caso. Por ejemplo, decir que todos tenemos derecho a la vida, equivale a decir que existe una norma jurídica que prohíbe a una clase de sujetos normativos —que en este caso está integrado por todos los hombres— privarme de la vida (salvo en los casos en que excepcionalmente se prevé la pena de muerte).

d) “Derecho” en el sentido de acción procesal

El término “acción” es uno de los conceptos básicos de una rama del derecho llamada “derecho procesal”, que se ocupa de los procedimientos que se llevan ante los órganos jurisdiccionales (jueces, tribunales, etcétera).

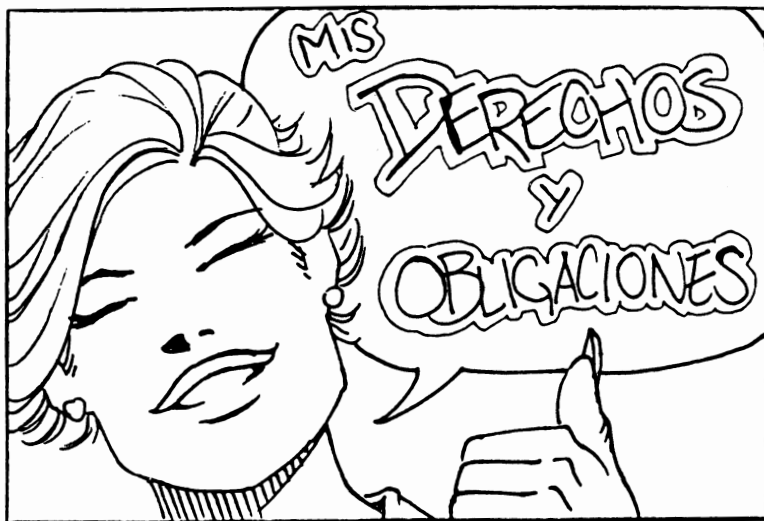
“Acción procesal” se define como “el primer acto por el que se activa un procedimiento jurídico”. Por ejemplo, al momento de presentar una demanda ante un tribunal estamos haciendo valer una acción.

NUESTROS DERECHOS

En ocasiones, decir que alguien tiene un derecho significa sostener que tiene un derecho de acción.

Cuando la expresión se usa en este sentido, se presupone la existencia de un derecho subjetivo como correlato de la obligación de otro sujeto, lo que implica la existencia de otra norma que es precisamente la que le impone esa obligación.

El sentido de “derecho” como acción es sumamente importante en la dinámica real del derecho, ya que refiere la posibilidad efectiva de que aquello a lo que tengo derecho se haga efectivo, incluso contra la voluntad del obligado. En realidad, de poco sirve que exista una norma por la que se obligue a un sujeto normativo a efectuar cierta conducta a la que tengo derecho (por ejemplo pagarme el



precio de un bien que le vendí) si en ninguna parte del ordenamiento jurídico existe otra norma que me conceda la posibilidad de activar el funcionamiento de los tribunales para que mi derecho se vea realizado.

H. *“Derecho” y la colección de cuadernillos Nuestros Derechos*

Con lo expuesto en este apartado y el que le precede, es fácil comprender la intención de la obra colectiva referida:

se trata de exponer de manera sencilla, los derechos (subjetivos) otorgados por el derecho mexicano (derecho objetivo), en diversas leyes que regulan diversas materias atendiendo sobre todo al tipo de sujetos normativos a quienes van dirigidas.

VI. “DERECHO” EN EL SENTIDO DE “CIENCIA JURÍDICA”

1. *Radiografías, leyes y jurisprudencia*

Suponer que la realidad “real” es una estructura objetiva susceptible de ser igualmente percibida por cualquiera, constituye una de las ideas más arraigadas en nuestros hábitos de pensamiento. Si esto fuera así, tendríamos que admitir que cualquier persona ve lo mismo que un radiólogo en una placa radiográfica, cuando ello es a todas luces falso: donde un lego ve manchones parecidos a patas de araña, el radiólogo puede estar leyendo las cicatrices causadas por una pleuresía, o un enfisema pulmonar. Esto

NUESTROS DERECHOS

significa que lo que vemos en el exterior no únicamente está determinado por lo que tenemos ante la vista sino, de modo muy especial, por los esquemas perceptuales a partir de los cuales lo interpretamos de determinada forma.

De manera similar ocurre con el derecho: no es suficiente saber leer para comprender lo que está plasmado en las leyes y participar en los procesos judiciales. Al igual que sucede con el radiólogo, la interpretación del derecho involucra algo más que la simple lectura de las leyes, códigos, etcétera: presupone esquemas perceptuales y formas de entender y organizar la información “bruta” que ellos contienen al interior de la “caja negra” de los juristas.

El último sentido de “derecho”, que comentamos en este capítulo, tiene que ver con esto, pues denota al conjunto de conocimientos “teóricos” propios de la profesión, que son los determinantes de nuestra forma de interpretar los textos jurídicos, de argumentar y contraargumentar, fundamentar sentencias, etcétera, y se encuentran en la base de la imagen esotérica de nuestra actividad (que en parte también puede obedecer al hecho de que algunos “colegas” parecen dedicarse más bien a practicar magia negra con sus pobres clientes).

Una expresión sinónima para este último sentido de “derecho” es “ciencia del derecho” o también “jurisprudencia” (nótese la ambigüedad de esta última que, como vimos, denota igualmente ciertas decisiones de los tribunales). “Derecho”, como sinónimo de “ciencia del derecho” aparece en expresiones del tipo: “Juan estudia derecho”, o “Immer imparte la clase de derecho en la UNAM”.

Dado el carácter divulgativo de este trabajo, no me detendré a exponer la problemática que gira en torno de si lo que los teóricos del derecho realizan, escriben y enseñan satisface o no las características mínimas para poder calificarlo de ciencia, ni detallaré en qué consisten sus métodos; simplemente, me conformaré con dejar constancia de su existencia y utilidad como parte de la labor técnica que subyace al ejercicio profesional y de la actividad académica de los juristas.

2. *Técnicos y abogados*

¿Qué haría usted si al principio de la transmisión de un clásico América contra Guadalajara se descompusiera su televisor? ¿Llamaría a su amigo investigador doctor en Física Subcuántica para que viniera a repararlo? A menos que la curiosidad natural del segundo le hubiera llevado a aprender algo sobre televisores por la recurrida vía del ensayo-error (con el riesgo de que la reparación de su aparato se sumara a los errores) o hubiera tomado un curso, lo más probable es que procurara evitar a su amigo el mal trago de mostrarle su peor cara de *¿What?* (misma que tal vez no pondría si le preguntara por el problema de la distribución espectral de la radiación en la energía térmica). Desde luego buscaría al modesto, pero eficiente, técnico de la esquina.

De igual manera que los técnicos de televisión, médicos o contadores, buena parte del conocimiento del derecho está encaminado a resolver problemas prácticos (en vez de realizar especulaciones teóricas). Ésta es precisamente la función de los abogados, asesores, notarios, jueces, etcétera.

Algunas de las herramientas metodológicas de estos profesionales, causantes de que el buen hombre de la calle

NUESTROS DERECHOS

no pueda ver lo mismo que ellos a pesar de tener enfrente el mismo texto, son:

- El conocimiento del significado de las expresiones del lenguaje técnico del derecho que, como hemos visto, además de las palabras que le son características, puede usar las mismas que el lenguaje coloquial, pero con significados distintos.
- El manejo de técnicas que permiten efectuar reconstrucciones normativas a partir de la totalidad de los textos jurídicos relevantes.
- El manejo de criterios para identificar contradicciones entre dos o más normas del sistema.
- El uso de reglas de interpretación que permiten ajustar dicho material de tal manera que la contradicción “desaparezca”.
- El manejo de métodos de interpretación que permiten conferir diversas interpretaciones a un mismo material normativo, como la *interpretación de las normas* a la luz de las supuestas finalidades que tuvo en cuenta el legislador al elaborar la ley, la *interpretación analógica* que les permite extender la cobertura de una norma a casos diferentes a los previstos literalmente, la *interpretación sistemática* consistente en asignar significado a una norma considerando su coherencia dentro de un capítulo, título o sección de una ley, la *interpretación restrictiva*, la *extensiva*, etcétera.

Gracias a todos estos recursos el jurista, al igual que los antiguos sacerdotes, posee el secreto (y monopolio) de una interpretación, que en nuestro caso, es la jurídica.

3. La actividad “científica” en el derecho

Como se comentó anteriormente, determinar las razones por las cuales los juristas dicen realizar una actividad científica es sumamente complicado y, en última instancia, este no es el lugar para abordar el tema. Sin embargo, científica o no, lo cierto es que algunos juristas realizan una actividad diferente a la de llevar casos prácticos o dictar sentencias.

Dicha actividad puede comprender dos clases fundamentales de investigación: la teórica general (normalmente denotada con los términos filosofía jurídica o teoría general del derecho) y la dogmática jurídica.

La diferencia fundamental entre una y otra estriba en que la primera se ocupa de proporcionar explicaciones válidas para todo derecho objetivo, analizando cuestiones como: ¿cuál podría ser un modelo adecuado de ciencia del derecho? ¿cuál es la estructura característica de todo sistema jurídico? ¿es el derecho un sistema de normas?, etcétera (como puede observarse, este trabajo quedaría ubicado dentro de esta categoría).

Por su parte,

la dogmática jurídica, o mejor dicho, las diferentes disciplinas dogmáticas, constituyen una reflexión sobre las distintas ramas en que se suele dividir el derecho, como son: el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal, etcétera.

NUESTROS DERECHOS

Contrariamente a lo que podría suponerse, no existe una correspondencia necesaria entre una rama del derecho y una codificación o ley. Por ejemplo, el derecho penal no es correlativo a un código penal, pues comprende tanto al federal como a los de los diversos estados de la República, a otras leyes como la Ley contra la Delincuencia Organizada y los delitos especiales previstos en otros ordenamientos legales.

Entre otras cosas, cada disciplina dogmática proporciona el andamiaje conceptual común y estable que da identidad a cada área independientemente de los cambios legislativos y los sistemas jurídicos concretos. De esta manera, la llamada teoría general del delito no versa únicamente sobre el derecho penal mexicano, ni el argentino, ni para las leyes actualmente vigentes, sino para cualquier legislación penal.

Una parte especial de la dogmática es la que se ocupa de los procesos jurisdiccionales y se conoce como teoría general del proceso. La relevancia de la misma hace que el derecho en general se distinga entre derecho sustantivo (el que se ocupa de regular la conducta de los sujetos normativos entre sí) y el adjetivo o procesal (que se ocupa de regular las conductas de los sujetos normativos, pero dentro del contexto de un proceso jurisdiccional).

Los métodos empleados por los dogmáticos en la realización de su labor son muy variados y comprenden los referidos en el epígrafe anterior, con la diferencia de que su aplicación no se realiza para plantear o resolver un asunto.

LENGUAJE Y DERECHO

to concreto, sino para proporcionar respuestas generales acerca de la coherencia del sistema jurídico, la manera en que hay que entender un artículo, etcétera.

Además de esos métodos y actividades, los dogmáticos suponen hacer cosas como determinar cuál es la esencia de las instituciones jurídicas (el matrimonio, por ejemplo); proporcionar definiciones reales correspondientes a la verdadera esencia de una entidad; elaborar clasificaciones ontológicas a partir de las características constitutivas de esas esencias; sistematizar el material normativo mediante la reducción de una diversidad normativa a reglas o principios más generales, de los que se pueden deducir aquellas u otras normas no previstas expresamente por el derecho positivo.

El resto de los cuadernillos de la colección, son trabajos de dogmática jurídica realizados sobre diferentes textos legislativos, aplicando los métodos referidos con un objetivo en parte "científico", pero sobre todo divulgativo.

A pesar de no formar parte del derecho positivo, la dogmática ha jugado un papel muy importante en las prácticas jurídicas desde el siglo anterior, dado que forma parte de los insumos que utilizan los juristas prácticos al momento de construir sus argumentaciones o justificar sus decisiones.

Sin embargo, como habrá podido percatarse nuestro lector, los métodos de la dogmática son el resultado de la sedimentación desordenada de formas de concebir el derecho a lo largo de la historia. De esta manera, la búsqueda de esencias, definiciones reales y clasificaciones ontológi-

NUESTROS DERECHOS

cas tienen su origen en el periodo del iusnaturalismo metafísico, mientras que la idea de poder elaborar teorías sobre los aspectos más diversos (teoría general de los contratos, teoría del delito, teoría de la prueba, teoría del derecho parlamentario, etcétera) concebidas como sistemas conceptuales con relaciones lógicas internas propias (y en ese sentido independientes del derecho positivo) son herencia de la concepción racionalista del derecho; en otras palabras: la regla hermenéutica según la cual hay que interpretar las normas en función de las finalidades atribuíbles al legislador al momento de elaborar las leyes proviene del siglo pasado, cuando se pensó que con la codificación se había llegado al punto culminante del desarrollo jurídico.

En la actualidad, la dogmática jurídica ha entrado en crisis, sobre todo debido al importante desarrollo que está teniendo la moderna jurisprudencia analítica construida sobre la base de técnicas de índole semántica, lógica y pragmática que proporcionan al análisis jurídico un soporte más objetivo, lo que hace posible abandonar la adhesión dogmática a naturalezas jurídicas, esencias, etcétera, para pasar al terreno democrático de la racionalidad compartida. Sobre esas mismas bases he pretendido elaborar estos dos pequeños trabajos que inauguran la colección Nuestros Derechos. Nada menos podría haber aspirado a ofrecerle, amable lector, que una respuesta moderna a un viejo problema en los albores del tercer milenio, en el que sin duda muchas cosas surgirán, otras desaparecerán y otras simplemente evolucionarán, entre ellas: el derecho. Porque como decían los antiguos romanos hace algunos milenios: donde hay sociedad... hay derecho.

BIBLIOGRAFÍA

- HART, H. L. A., *El concepto de derecho*, México, Editora Nacional, 1980.
- SÓFOCLES, *Las siete tragedias. Antígona*, México, Porrúa.
- ARISTÓTELES, *Ética a Nicómaco*, México, Espasa Calpe Mexicana, 1975.
- AQUINO, Tomás de, *Suma Teológica*, México, Espasa Calpe Mexicana, 1968.
- HOBBS, Thomas, *El Leviatán*, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.

Lenguaje y derecho. Las normas jurídicas como sistema de enunciados, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir en noviembre de 2000 en los Talleres Gráficos de la Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. En la edición se empleó papel cultural 57 x 87 de 37 kg para las páginas interiores y cartulina couché de 162 kg para los forros. Consta de 2 000 ejemplares.

¿Qué es el derecho?

Lenguaje y derecho

Arrendador
Arrendatario
Campesinos
Consumidor
Contribuyentes
Creyentes
Detenidos y sujetos
a proceso
Enfermo mental
Extranjeros
Hombre y mujer
divorciados
Homosexuales
Inmigrantes
Internos del sistema
penitenciario mexicano
Medio ambiente
Menores trabajadores
Mujeres trabajadoras
Niños
Padres e hijos
Patrones
Pensionado y jubilado
Personal de la salud
Personas con SIDA
Propietario
Trabajador asalariado
Trabajador de confianza
Trabajadores domésticos
Usuarios de la banca
Usuarios de los servicios
de salud

ISBN 968-36-8221-9



1940-2000



años